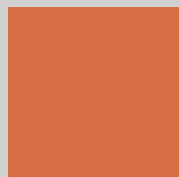




La Guerra Interiorizada

De los crímenes internacionales a la vida pública de México

2006-2021



La Guerra Interiorizada

*De los crímenes internacionales
a la vida pública de México*

Coordinación

Jorge Luis Amaya Lule

Autoras/es:

Itzel Coca Ríos

Jorge Luis Amaya Lule

Equipo de sistematización y documentación de casos

Daniel Omar Mata Lugo

Luna Molina Marcos

Raquel García Montaña

Zhiri Jael Meza Fragoso

Carolina Odette Narváez García

Diseño editorial

María Michelle Velasco

Karina Paola Alvarez Medrano

Primera edición, Enero de 2023.

Hecho en México.

ISBN:

Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación siempre y cuando se cite la fuente.

Contacto Dirección: Tehuantepec #142, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, CDMX Teléfono: 55 5564 2582

HYPERLINK

<https://cmdpdh.org/2023/01/31/informe-la-guerra-interiorizada/>

Redes sociales

@cmdpdh    

Directorio

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Consejo Directivo

Luis González Placencia (**Presidente**)
Ana Francisca Vega
Ana Pecova
Carolina Coppel
Luis Daniel Vázquez Valencia
Pilar Calveiro Garrido
Regina Tamés Noriega
Valentina Zendejas Moheno
Ximena María Medellín Urquiaga

Directora Ejecutiva

Lucía Guadalupe Chávez Vargas

Subdirección de Litigio

Víctor Alonso del Pozo Rodríguez

Coordinación de Administración

Lizbeth Montessoro Elías (**Coordinadora**)
Héctor Adrián Avendaño Cortez

Coordinación de Comunicación

Eva Patricia Avilés Gómez (**Coordinadora**)
María Michelle Velasco
Lizbeth Marisol Jiménez Rodríguez

Coordinación de Desarrollo Institucional

Giselle Yáñez Villaseñor (**Coordinadora**)
Nicole Stump Carsolio

Coordinación de Desplazamiento Interno

Lígia de Aquino Barbosa Magalhães
(**Coordinadora**)
Daniel Alejandro Márquez Bocanegra
Laura Victoria Alvarado Aizpuru

Coordinación de Incidencia

Carlo Carvajal Aguilar
Michel Elías Manzur Soda

Coordinación de Investigación y Análisis Criminal

Jorge Luis Amaya Lule (**Coordinador**)
Itzel Coca Ríos
María José de Icaza Benet

Coordinación de Solicitantes de Asilo

Yoceline Gutiérrez Montoya (**Coordinadora**)
Norah Fernanda Gallego Tapia

Coordinación de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial

Aarón Orlando González García
Norma Isabel García Flores

Coordinación de Defensa

Mariana Guadalupe Domínguez Flores
Miguel Ángel Alcaraz Ceballos
Víctor Miguel Dávila Leal

Consultoras/es en áreas

Jorge Arturo Mora Huiza
(Administración)
Karin Salazar Castillo
(Desarrollo Institucional)
María de Jesús Arcos Tenorio
(Administración)
Víctor Manuel Meade Canales
(Defensa)
María Fernanda Chávez Quiroz
(Defensa)

Índice

Abreviaturas	1
Nota Metodológica	2
Capítulo 1	6
Del Militarismo y lo Militarizado: 15 años de una guerra interiorizada.	
1.1. Militarismo y Militarización: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Modelo Militar?	9
1.2. XV Años de Guerra contra las drogas: La idea interiorizada de la necesidad de la seguridad castrense	11
Capítulo 2	16
La persistencia de los patrones de violaciones graves a derechos humanos	
2.1 Tortura, los ataques sistemáticos contra la población	18
2.2 Desaparición, una crisis que no se detiene	29
2.3 Asesinato, el más costoso de los fracasos	41
Capítulo 3	53
La guerra interiorizada: Todos los militares a las calles.	
3.1 Todos los militares a las calles	56
3.2 Estructuras criminales y violencia de sistema	59
3.3 De la seguridad pública a la vida civil	65
Consideraciones finales	70
Referencias	71

Abreviaturas

AIFA	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
AMLO	Andrés Manuel López Obrador
Birmex	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
CINE	Compañías de Infantería No Encuadrada
CMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
CNB	Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNS	Comisión Nacional de Seguridad
DOF	Diario Oficial de la Federación
ENPOL	Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad
EPN	Enrique Peña Nieto
FAM	Fuerzas Armadas Mexicanas
FCH	Felipe Calderón Hinojosa
FFAA	Fuerzas Armadas
FGR	Fiscalía General de la República
GN	Guardia Nacional
I-Doc	Investigation and Documentation System
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM	Instituto Nacional de Migración
MCCI	Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
MPF	Ministerio Público Federal
PF	Policía Federal
PFM	Policía Federal Ministerial
PFP	Policía Federal Preventiva
PGR	Procuraduría General de la República
PIB	Producto Interno Bruto
PNT	Plataforma Nacional de Transparencia
RM	Región Militar
RNPDO	Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMAR	Secretaría de Marina
SESNSP	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
ZM	Zona Militar

■ Nota Metodológica

La Guerra Interiorizada: De los crímenes internacionales a la vida pública de México (2006-2021), representa la tercera entrega sobre la documentación de crímenes graves cometidos por las instituciones de seguridad de México durante su actuación en el combate al narcotráfico o contra las organizaciones criminales, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La investigación hace un recorrido por lo que ha pasado en estos 15 años de “Guerra contra las drogas” (2006-2021), iniciada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 y continuada por las dos administraciones subsecuentes, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2022). La Guerra provocó una progresiva militarización en el país e hizo posible que elementos castrenses estén a cargo de la seguridad pública estatal, municipal y federal.

El texto está conformado por tres bloques principales. El primero comprende un breve estudio histórico de la “Guerra contra las drogas” como política de seguridad, haciendo una distinción entre la militarización como proceso e implementación de dicha política pública y el militarismo como la incidencia de la estructura militar en la vida política del país. El segundo muestra el panorama respecto de los crímenes internacionales que se han cometido al amparo de la guerra: tortura, desaparición y asesinato, así como los patrones de actuación de las distintas instituciones que son señaladas como responsables de su comisión, con énfasis en las Fuerzas Federales del Estado mexicano [Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Federal (PF) y Guardia Nacional (GN)]. El estudio tiene como fuentes de información recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas entre 2006 y 2021, respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDO), así como el análisis de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL 2021). Finalmente, el tercer bloque muestra cómo esta guerra se ha interiorizado y acrecentado, a través del análisis del despliegue histórico militar en el país, las estructuras castrenses involucradas en actos de violencia de sistema que constituyen crímenes internacionales, y el aumento sostenido del presupuesto y atribuciones de los cuerpos militares en la vida civil.

Con tal propósito se utilizó la base de datos “Investigation and Documentation System (I-Doc)” de Case Matrix Network¹. Plataforma que permite el análisis de casos referentes a crímenes internacionales, perpetrados por agentes del Estado. La herramienta tiene la intención de identificar patrones de actuación

¹ The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y al Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

de las autoridades, así como calificar si el ataque fue generalizado o sistemático, y si el mismo formaba parte de una política en un periodo determinado. Mediante el uso de esta se sistematizaron 380 casos de crímenes internacionales, narrados en 324 recomendaciones emitidas por la CNDH, en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2021. De las que se desprende un total de 2,200 víctimas, de las que al menos 1,588 personas fueron torturadas, asesinadas y/o desaparecidas forzosamente, en tanto que el resto de ellas fueron víctimas de detenciones arbitrarias o violaciones a su derecho de propiedad por los robos o los daños causados a sus casas durante sus detenciones o las de sus familiares.

Estas recomendaciones son públicas y narran hechos investigados por la CNDH. Al menos 319 de las 324 recomendaciones analizadas para esta investigación fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron dirigidas². Así pues, no se trata de sucesos controvertidos por las instituciones señaladas como responsables, toda vez que, al aceptar dichos documentos, se reconocen los hallazgos, las conclusiones y la atribución de la responsabilidad institucional por los hechos acontecidos.

La temporalidad de los casos seleccionados para la documentación se encuentra dada por el contexto de la “Guerra contra las drogas” o “Lucha permanente al narcotráfico” (del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2021). Durante este periodo se emitieron 1,320 recomendaciones, de las cuales 49 fueron publicadas con el título de “violaciones graves”. A partir de la lectura y el análisis de la totalidad de sus contenidos, se llegó a la conclusión de que a esas 49 se les debería sumar otras 275 que narran hechos con elementos suficientes para ser considerados violaciones graves a derechos humanos y que además constituyen crímenes internacionales, cometidos o auspiciados por el aparato estatal. En este sentido, cuando hablamos de las recomendaciones que registran casos de violaciones graves a los derechos humanos, nos referimos a los resultados de la revaloración y análisis por parte de la CMDPDH; es decir, que se trata de 324 recomendaciones de violaciones graves en total.

De forma complementaria a este análisis de casos se realizaron 331 solicitudes de información a través de la PNT, referentes a los temas de desaparición, tortura y ejecución, a las que se les dio seguimiento entre diciembre de 2021 y agosto de 2022³: Se dirigieron 203 solicitudes a las fiscalías o procuradurías estatales, 99 a los organismos estatales de derechos humanos, 15 a la Fiscalía General de la República (FGR), 8 a la CNDH, 3 al Consejo de la Judicatura Federal, 1 a SEDENA, 1 a SEMAR y 1 a GN. Adicionalmente, fue necesario interponer 53 quejas por deficiencias en las respuestas o la omisión de responder, a pesar

² Existen 4 Recomendaciones que aún se encuentran en trámite y en tiempo de ser contestadas: 109/2021, 112/2021, 114/2021, 141/2021. Y 1 Recomendación de la que no se cuenta con información al respecto de su estatus: 18VG/2021. Es importante mencionar que el artículo 16 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que “Tanto el Presidente de la Comisión, como los Visitadores Generales y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o inconformidades, presentadas ante la Comisión Nacional.”

³ 5 de las solicitudes a CNDH se realizaron en julio de 2022 y se les dio seguimiento hasta agosto de ese año. El resto de las solicitudes se realizaron en diciembre de 2021 y se les dio seguimiento hasta el mes de mayo de 2022.

de ello, hubo 4 solicitudes en que no se obtuvo ninguna respuesta después de más de seis meses (3 de la fiscalía estatal de Baja California y una de la Fiscalía estatal de Colima).

Además, se realizó un análisis de la ENPOL 2021, la cual es un ejercicio realizado por el INEGI cuyo objetivo radica en generar estadísticas sobre la experiencia de las personas a lo largo del proceso penal así como su permanencia en los centros penitenciarios a nivel nacional. De acuerdo con el diseño de la encuesta, la muestra probabilística y estratificada se calculó a partir de un listado de 210,680 personas internas en centros de reclusión (12,049 mujeres y 198,631 hombres), quedando integrada por 67,584 personas privadas de la libertad (55,535 hombres y 12,049 mujeres). Se trata de una estimación probabilística que tiene representatividad nacional, en otras palabras cada una de las personas encuestadas “representa” a otras tantas de la población nacional de personas privadas de la libertad.

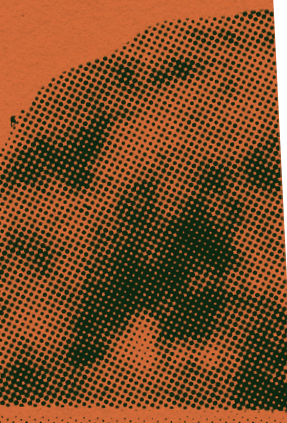
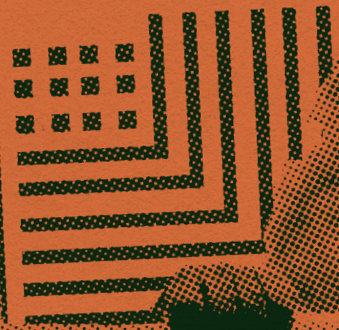
El periodo de cobertura de la ENPOL va desde 1977 hasta julio de 2021, es decir, las personas encuestadas fueron arrestadas durante este lapso, aunque es importante mencionar que las detenciones realizadas desde 2006 representan cerca del 92% de las personas encuestadas. De este grupo vale aclarar que para este informe sólo se examinaron los registros de personas detenidas del 2006 hasta julio de 2021, que fueron arrestadas por alguna autoridad. De igual forma se debe puntualizar que para la investigación sólo se tomaron en cuenta respuestas efectivas (Sí/No) y se descartaron opciones como “No sabe” o “No responde”.

Adicionalmente se consultaron: a) la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas⁴, para revisar los datos de personas con estatus de persona desaparecida o no localizada cuya desaparición se registró como ocurrida entre el 01 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2021; b) los datos abiertos de incidencia delictiva del SESNSP⁵, respecto a los homicidios perpetrados en el país entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2021.

A partir de estos datos y del análisis de casos se busca evidenciar el contexto de crímenes graves existentes en México perpetrados a través de la implementación de una política de seguridad que se ha afianzado, en la que a los cuerpos militares se les han otorgado cada vez más atribuciones en la vida civil, interiorizando una guerra en la vida pública del país, en la que los máximos responsables de cometer crímenes internacionales siguen gozando de completa impunidad.

⁴ Disponible en: <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral>. Datos consultados y actualizados al 24 de abril de 2022. Cabe resaltar que el RNPDO es una base de datos que se actualiza en tiempo real por parte de diversas autoridades, así como la integración de reportes de diversas fuentes, por lo que su información es muy variable y sensible al momento específico de su consulta.

⁵ Disponible en: <https://www.gob.mx/sesnspp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published>. Datos actualizados al 20 de abril de 2022 y consultados el 16 de mayo de 2022. Anterior a 2015 no se tiene información en esta fuente desagregada por víctimas.



Capítulo 1

Del Militarismo y lo Militarizado: 15 años de una guerra interiorizada

¿Qué tan cotidiana es la violencia para ser invisibilizada? o ¿Qué tan profunda tiene que ser para ser interiorizada? El presente documento se centra en el análisis de eventos en el marco de la “Guerra contra las drogas”, de situaciones que impulsaron la adopción de un modelo de seguridad militarista para el combate frontal al narcotráfico, así como de los crímenes que se perpetraron bajo su justificación. Ante esto resulta fundamental definir lo que se entiende por guerra, militarismo y militarización, así como hacer un ejercicio de memoria para visibilizar cómo este modelo se fue transformando y adquiriendo cada vez más atribuciones hasta su consolidación e interiorización en la vida pública mexicana.

Han pasado ya más de 15 años desde aquel diciembre de 2006 en el que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) decidió emplear a las Fuerzas Armadas (FFAA) en el “Combate frontal al narcotráfico” o “Guerra contra las drogas”. A pesar de que en años anteriores ya se había presenciado el uso de las FFAA para tareas distintas a sus atribuciones viendo a efectivos castrenses realizando labores de rescate o servicios sanitarios para la población en situaciones de desastre con la implementación del Plan DN III⁶, o en temas de seguridad, realizando retenes y patrullajes en la época de la guerra sucia o terrorismo de estado⁷; nunca antes se había dado la participación de las fuerzas armadas de la forma en la que ha sucedido durante los últimos años en el marco del combate frontal al narcotráfico.

⁶ Es un operativo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que data del año 1966, como consecuencia del desbordamiento del Río Pánuco. Mismo que habilita que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos realicen actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

⁷ Se conoce como “guerra sucia” a un periodo de represión política autoritaria comprendido entre 1965 y 1982 (aunque los años pueden variar de acuerdo a las interpretaciones históricas) dirigido contra expresiones de disidencia ideológica de izquierda organizadas principalmente en guerrillas rurales y urbanas, y que fue instrumentalizado a través del Ejército y la Dirección Federal de Seguridad. Se tienen documentados decenas de casos de personas detenidas y torturadas en instalaciones oficiales y de quienes se desconoce su paradero posterior, así como testimonios de cientos de personas que reportan familiares desaparecidos.

Desde entonces, la seguridad pública ha adoptado un modelo militarista, en el que se ha promovido la participación de elementos castrenses directamente en labores que le corresponden a las policías civiles, por el nombramiento de militares en altos mandos de las instituciones civiles, principalmente de seguridad pública estatal, municipal y federal (Carrasco, 2017), así como por la formación de tipo militar que está recibiendo la GN. Todo ello, a pesar de que la Constitución mexicana establece que la seguridad pública es una función que debe estar a cargo de civiles, es decir, no es una tarea que corresponda a las fuerzas militares y mucho menos en tiempos de paz⁸.



La política de seguridad militarista implementada por las administraciones de FCH, Enrique Peña Nieto (EPN) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha significado la promoción de ataques sistemáticos contra la población civil por parte de las FFAA (detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad física en contravención de normas internacionales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos), con el supuesto objetivo de desarticular a las organizaciones criminales, así como imponer el control del gobierno sobre algunos territorios para afectar la operación de estas organizaciones y contener la proliferación del narcotráfico. Para la instrumentación de esta política, se dispuso de numerosos policías, soldados y marinos, y en la actualidad de la creación de la GN (un cuerpo supuestamente civil, conformado y operado por militares).

Para muchas personas, el modelo militar representa restricción, disciplina, honor, control, competencia y una especie de patriotismo. Para otras, representa tiranía, violencia estatal, abusos de los derechos humanos, guerra y una ideología que considera que los problemas sociales se manejan mejor a través de la fuerza estatal (Kraska, 2007).

⁸ De acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "[...] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley [...] Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional." El artículo 129 de la Constitución señala que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, en marzo de 2019 se hizo una reforma constitucional al artículo 21, para incluir a la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil, aun cuando los titulares y mandos de esta serían militares. Por otra parte, el artículo 29 del mismo ordenamiento regula la suspensión de derechos fundamentales en el país cuando el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, haga frente a situaciones o estados de emergencia.

Para entender por qué las personas tienen diferentes representaciones del modelo militar, es indispensable observar las dimensiones que tiene desde la base, es decir, cómo se diseña, opera y se justifica. Igualmente, resulta necesario analizar sus objetivos y los patrones de actuación que las instituciones de seguridad demuestran al momento de operar y sus actos concluyen en hechos constitutivos de crímenes internacionales. En el texto, se evidencia que la tortura, la desaparición y los asesinatos en México no son una práctica excepcional o aislada, sino un fenómeno generalizado que devela un patrón de conducta que se repite en hechos criminales.

Así, el involucramiento a gran escala de las autoridades militares perpetradoras responde a una política de Estado, y su actuación es ordenada, tolerada y propiciada por los más altos mandos ante la necesidad de “mostrar resultados” de la estrategia de guerra que promueve la militarización. Misma que a más de 15 años de su implementación se ha afianzado, interiorizándose en la vida pública del país con unas FFAA involucradas en la seguridad pública federal y local, en obra pública, programas de salud y educación, control fronterizo, migratorio y aduanal, entre otras.



1.1. Militarismo y Militarización: ■ ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Modelo Militar?

El militarismo es un conjunto de creencias, valores y suposiciones que enfatizan el uso de la fuerza y la amenaza de violencia como los medios más apropiados y eficaces para resolver problemas. Acentúa el ejercicio del poder militar, el *hardware*, la organización, las operaciones y la tecnología como sus principales herramientas de resolución. Mientras que la militarización es la implementación de esa ideología. Es el proceso de armar, organizar, planificar, entrenar, amenazar y, en ocasiones, implementar un conflicto violento. Militarizar significa entonces, adoptar y aplicar los elementos centrales del modelo militar a una organización o situación particular (Kraska, 2007).

Este conjunto de creencias es posible verlo dentro del modelo de seguridad civil sin necesidad de presenciar el despliegue castrense, pueden percibirse en la cultura, en el poder de fuego (armas), en los lenguajes y en diferentes prácticas operacionales, como el uso desproporcionado de la fuerza, o el abatimiento de objetivos como principal meta. La militarización del modelo de seguridad es simplemente el proceso por el cual el modelo civil se basa cada vez más en principios militares y se moldea en torno a ellos.

Aunque constantemente, de forma discursiva y casi comercial, se intenta asegurar que la presencia de militares es clave para disminuir los niveles de violencia ante el crimen organizado, la evidencia demuestra que esto es falso. El despliegue militar en las calles incrementó el número de crímenes internacionales, desató enfrentamientos en donde la población civil queda vulnerable ya que no hay una política para su protección, se recurrió a la fabricación de culpables y demás actos que se dan al margen del debido proceso y de las responsabilidades internacionales que México ha adoptado.

En este sentido, la militarización requiere que el militarismo sea una parte fundamental del sistema de creencias, que se encuentre tan interiorizado y asimilado en la idea popular, que sea una situación cotidiana para que pueda ser suministrada de suficiente apoyo moral, financiero y de personal.

Metáforas como “la Guerra contra las drogas, el crimen y el terrorismo” juegan un papel poderoso en la construcción de la realidad: dan forma a las prácticas discursivas, aclaran valores y comprensión, y guían los procesos de resolución de problemas. Enmarcar los problemas del crimen, el terrorismo y las drogas usando un lenguaje militarista, por lo tanto, probablemente resultará en pensamientos y acciones que correspondan con el paradigma de guerra/militar (Kraska, 2001).

Son estas mismas metáforas las que complejizan el entendimiento de los riesgos reales que trae consigo la adopción de un modelo militar, que puede ser interiorizado e incluso disfrutado, así como impuesto y desgastante. Que a partir de muchas dinámicas basadas en la hipermasculinización y la fuerza, se han vuelto una parte integral y cotidiana de los sistemas de valores y creencias de un país con una política de seguridad que se ha arraigado y se encuentra basada en el abatimiento del enemigo y el combate frontal, sin un análisis serio de las distintas violencias y el sinnúmero de víctimas y hechos victimizantes que se dan cada día en el país.

Para entender estos riesgos ante el hecho de que la seguridad civil (y en general la vida pública y política) adopte cada vez más características y formas militares, es necesario observar las dimensiones que este modelo refiere. Mismas que nos pueden ofrecer indicadores del nivel de militarización de un país (Kraska, 2007):



Material: armamento, equipo, materiales de guerra y tecnología avanzada.



Cultural: lenguaje, estilo (apariencia), creencias y valores.



Organizativa: arreglos militares, comando y control, escuadrones de élite y unidades especiales.



Operacional: patrones de actividad inspirados en el ejército, como en las áreas de inteligencia, supervisión, manejo de situaciones de alto riesgo o guerra.

En este sentido, la verdadera preocupación está en discernir el grado de militarización existente en los cuerpos destinados para la procuración de la seguridad y demás ámbitos de la vida civil. Lo alarmante es que al estar en las calles, utilizan niveles de fuerza desproporcionados, así como otras dinámicas correspondientes a un conflicto armado del Estado ante una amenaza. Aunque en este documento no abordemos todas las dimensiones de forma directa, sí se pretende tocar cada una de ellas, ofreciendo datos e indicadores que visibilicen la medida en que el modelo militar ha logrado penetrar en la vida pública y política del país, hasta el grado de generar e interiorizar la idea de necesidad de los cuerpos castrenses ante la situación de confrontación y guerra con el crimen organizado.

1.2. 15 Años de Guerra contra las drogas: La idea interiorizada de la necesidad de la seguridad castrense

La seguridad en México fue adoptando cada vez más elementos y características culturales, estructurales, materiales (poder de fuego⁹) y operacionales del modelo militar, un proceso que se aceleró de manera abrumadora a partir de diciembre de 2006 con la creación de la idea de un enemigo público que genera la necesidad de la aplicación de otras formas de defensa y combate, legitimando el uso de tácticas, estrategias y armas de carácter militar en la procuración de la seguridad civil, así como el despliegue de elementos castrenses para el desarrollo de estas tareas.

Así la seguridad civil se pintaría de verde olivo, bajo la falsa justificación de detener la proliferación de los grupos del crimen organizado, que a más de 15 años de iniciada esta guerra siguen operando e incluso creciendo, han aparecido nuevas organizaciones y el objetivo del despliegue no se ha cumplido. Por el contrario, los resultados de este ejercicio han traído consecuencias catastróficas, mismas a las que haremos alusión en el segundo capítulo.

Es así que en el paso de los años, la idea de la necesidad de guerra o combate se ha interiorizado en la vida pública del país, y se ha ido reforzando a través de diferentes reformas, ordenamientos, propuestas de ley y con cada vez más atribuciones a las FFAA, como obra pública, control migratorio y aduanal, seguridad, entre otros.

En el transcurso de los gobiernos de FCH, EPN y AMLO, después de iniciada la estrategia de seguridad nacional, con el ánimo de regular la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública, se ha hablado de forma constante de la importancia y relevancia de que las FFAA sean garantes de seguridad civil, creando extensas campañas de comunicación y validación de los cuerpos militares, como una institución confiable y segura, a pesar de los crímenes que cometen y el incremento exponencial en los índices de violencia y homicidios con arma de fuego, en aquellos estados en los que se desplegaron operativos militares. Mismas campañas que se han visto acompañadas de la estigmatización y criminalización de diferentes poblaciones y víctimas, con la intención de desmovilizar e invisibilizar los reclamos de justicia.

⁹ Se refiere a la producción, suministro y diversidad de armas que se tiene a disposición para el cumplimiento de las tareas, así como del equipamiento y otros materiales.

A pesar de las funestas consecuencias que trajo consigo la implementación del modelo militar y en paralelo a las campañas de comunicación que buscan validar y justificar su actuar, se emitieron diversos reglamentos relativos al uso de la fuerza, cuyas disposiciones no cumplían con los estándares internacionales en la materia, tales como:

La Directiva 003/09, emitida por la SEMAR en 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho¹⁰.

Una Directiva, emitida por la SEDENA en 2012, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en “aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”¹².

En 2017 se promovió por parte del gobierno en turno (EPN) la llamada Ley de seguridad interior, en la que el presidente de la República podría ordenar por sí solo o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior; permitiendo que las FFAA desarrollaran actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior.

La Directiva 001/10, emitida por la SEMAR en 2010, sobre el respeto a los derechos humanos y la observancia del orden jurídico vigente en las operaciones en contra de la delincuencia organizada¹¹.

En 2014, a más de 7 años de implementada la estrategia, todos estos lineamientos fueron integrados dentro del Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres FFAA¹³.

En 2019, la publicación de la “Ley de la Guardia Nacional” en el DOF donde se definió a este cuerpo como una institución de seguridad pública de carácter civil y la facultó para realizar funciones de seguridad pública en las entidades federativas y municipios¹⁴.

¹⁰ Diario Oficial de la Federación (DOF), 15 de octubre de 2009.

¹¹ DOF, 6 de diciembre de 2010. Este último documento fue reformado en 2012, mediante el “Acuerdo Secretarial 27”, publicado en DOF, 23 de abril de 2012.

¹² Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012, disponible en esta dirección: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244755&fecha=23/04/2012. (Último acceso: 14 de Septiembre 2022).

¹³ Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014. (Último acceso: 14 de septiembre de 2022).

¹⁴ DOF, 27 de mayo de 2019. Ley de la Guardia Nacional. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019#gsc.tab=0 (último acceso 11 de octubre de 2022).

En 2020 se emitió el acuerdo militarista por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo permite a las FFAA realizar las funciones que se incluyen en la ley de la Guardia Nacional e instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de SEDENA y SEMAR para definir las actividades de las FFAA que complementarán a la Guardia Nacional¹⁵.

Finalmente, en 2022 el Presidente de la República presentó una iniciativa el 31 de agosto, a fin de reformar, adicionar y derogar ciertas leyes para que, entre otras, la SEDENA tenga a su cargo el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Además de que en octubre del mismo año, el Pleno del Senado de la República aprobó, con cambios, la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019, para extender, por 4 años más, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Dichos documentos han sido lo más cercano a establecer “reglas de actuación” o “reglas de enfrentamiento” para las FFAA en el marco de la “Guerra contra las drogas”. En ellos se establecen las definiciones de lo que se considera uso indebido de la fuerza y los casos en los que los miembros de las FFAA pueden accionar sus armas y hacer uso de la fuerza letal; además, contienen un reconocimiento explícito del vacío legal en el que se encuentran sus operaciones.

De manera particularmente alarmante, la iniciativa del Ejecutivo presentada en 2022 atenta abiertamente contra el artículo 21 constitucional que establece que “[l]as instituciones de seguridad pública, incluyendo la GN, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Sin embargo la iniciativa afirma que la GN continuará su consolidación como una institución civil solo de nombre, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al tiempo que limita su papel a elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y otorga a militares las facultades de investigación, inteligencia, adiestramiento y capacitación. Sin mencionar que también pretende modificar la Ley de la Guardia Nacional para que el personal militar adscrito a dicha corporación esté sujeto al fuero militar en caso de cometer infracciones castrenses.

A más de 15 años de iniciada la estrategia de seguridad basada en el combate frontal al crimen organizado empleando elementos, estrategias y modelos militares, no se han visto los resultados esperados.

¹⁵ DOF. 11 de mayo de 2020. ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0 (último acceso 11 de octubre de 2022).

Sin embargo, se continúa con la narrativa de su necesidad y la promoción de su instauración, generando creencias, valores y suposiciones que enfatizan el uso de la fuerza y la amenaza de violencia como los medios más apropiados y eficaces para resolver problemas.

Se interiorizó la idea del conflicto y es cada vez más común ver a personal militar en tareas ajenas a sus funciones originales. El militarismo y la guerra son disfrutados y adoptados, tanto como impuestos. A través de aprender, disfrutar e internalizar los principios del militarismo, el marco ideológico personal de mucha gente está constituido por la violencia y la guerra, ya sea con otras naciones, con otras pandillas, con infractores de las políticas de drogas, o con la policía (Kraska, 2020: 296).





Capítulo 2

La persistencia de los patrones de violaciones graves a derechos humanos

Tras la imposición de la estrategia militarizada de seguridad en México, los años siguen pasando y se siguen acumulando cientos de miles de víctimas de crímenes internacionales. En este capítulo se plasma la información oficial más reciente respecto a consecuencias atroces en el país en el largo trayecto de 2006 a 2021: la sistematicidad de la tortura, la crisis de desapariciones y el flagelo de los asesinatos.

Los datos muestran que los crímenes internacionales cometidos, entre otras autoridades, particularmente por las FFAA y ahora por la Guardia Nacional, contribuyen a la violencia y solo crean más víctimas, siguiendo ésta el patrón de actuación y la narrativa marcada por el Ejército y la Marina, instituciones de donde proceden la mayor parte de sus elementos. Además, la información apunta a que se perpetran violaciones graves a derechos humanos en todas las entidades del país, en ocasiones bajo contextos muy similares, lo que hace evidente que no se trata de un problema aislado sino de una cuestión estructural y de diseño del sistema de seguridad y justicia del país que se traduce en patrones de conducta por parte de sus integrantes civiles y militares.

Sobre los datos obtenidos de manera oficial a través de la PNT, a pesar de algunos avances en el registro de este tipo de datos, encontramos alarmante que la mayoría de las instituciones no recojan y sistematicen suficiente información relativa a las características demográficas básicas de las víctimas, ya que solo con este tipo de datos pueden conocerse las dinámicas específicas con que se cometen estos crímenes. No es posible entender los problemas y diseñar estrategias de prevención, atención, reparación y no repetición si no se cuenta con el desagregado de a quiénes está afectando y la manera en que se cruzan diversas vulnerabilidades de la población en este contexto.

Aunado a lo anterior, muchas instituciones no tienen información básica de los hechos ocurridos en administraciones anteriores, lo que es especialmente visible en las respuestas a solicitudes de información de las fiscalías, que ofrecen solo un panorama parcial del recuento histórico. Así, las cifras ofrecidas no pueden tomarse como definitivas y la totalidad de estos crímenes debe ser vista a la luz de la cifra desconocida compuesta por miles de casos no denunciados y bajo el entendido de que los crímenes cometidos en el ámbito municipal y estatal tendrían que ser reforzados con otras fuentes. Sin embargo, con los datos oficiales sí podemos afirmar que son prácticas funestas que persisten con fuerza y que no hay indicios de que pronto puedan ser revertidas si las estrategias adoptadas no se modifican de raíz.



2.1. Tortura, los ataques sistemáticos contra la población

De acuerdo con los casos documentados por la CMDPDH y por organismos internacionales, la tortura es una práctica sistemática y generalizada perpetrada por todas las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano, la cual es usada como castigo o muy comúnmente para obtener beneficios, confesiones o como un método de investigación que suple la falta de investigaciones profesionales. Esto es indicio de la falta de capacidades de las autoridades, así como del menosprecio a los principios de la debida diligencia y la presunción de inocencia. La tortura es uno de los eslabones que permiten que miles de inocentes permanezcan en las cárceles mexicanas, además de que es una práctica que atenta contra la dignidad de las personas y de las comunidades.

Las fiscalías o procuradurías del país registran en sus bases de datos¹⁶ 49,051 denuncias por tortura entre enero de 2006 y noviembre de 2021¹⁷, como lo muestra la siguiente gráfica. Del total de carpetas y averiguaciones registradas, casi la tercera parte (15,909) corresponden exclusivamente a los últimos tres años, es decir, durante la actual administración federal. Cabe apuntar que las instituciones solo tienen registro de 96 consignaciones o judicializaciones, lo que representa menos del 0.2% de las denuncias. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal¹⁸ reporta 68 sentencias por tortura, mientras los poderes judiciales estatales¹⁹ tienen registro de 27 en el periodo de estudio, lo que indica una altísima prevalencia de impunidad en este crimen.

¹⁶ Respuestas a solicitudes de información: FGR (330024621000875 y 330024621000883), Aguascalientes (010054821000112 y 010054821000111), Baja California (021381021000171 y 021381021000170), Baja California Sur (030075421000089 y 030075421000088), Campeche (040081000009721 y 040081000009621), Chiapas (070136721000113 y 070136721000112), Chihuahua (080139721000217 y 080139721000216), Coahuila (050096900014821 y 050096900014721), Colima (061903921000096 y 061903921000095), Ciudad de México (092453821000700 y 092453821000699), Durango (101126500010221 y 101126500010021), Guanajuato (112093900034421 y 112093900034321), Guerrero (120203121000106 y 120203121000105), Hidalgo (130213100041821 y 130213100041721), Jalisco (140255821000636 y 140255821000635), Michoacán (162155721000104 y 162155721000103), Morelos (172237721000122 y 172237721000121), Nayarit (180369321000084 y 180369321000083), Nuevo León (191841721000152 y 191841721000151), México (423984 y 423983), Oaxaca (201172621000098 y 201172621000097), Puebla (210421521000245 y 210421521000244), Quintana Roo (231286200011321 y 231286200011221), Sinaloa (250483000011121 y 250483000010921), Tabasco (270511400010921 y 270511400010821), Tamaulipas (281197021000122 y 281197021000121), Tlaxcala (291213221000094 y 291213221000093), Sonora (261156222000154 y 261156222000153), Yucatán (310568621000113 y 310568621000112) y Zacatecas (321103821000093 y 321103821000092). Las fiscalías que no proporcionaron información son: Querétaro (221277421000103 y 221277421000102), San Luis Potosí (240469821000121 y 240469821000120) y Veracruz (301146700012721 y 301146700012621).

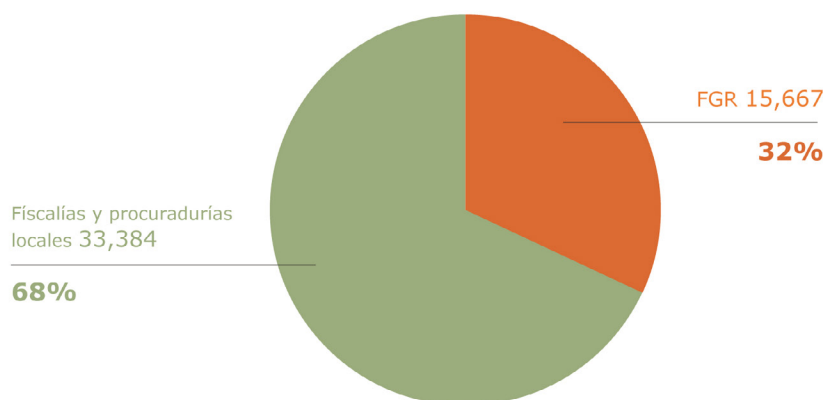
¹⁷ Las instituciones que proveyeron información que no cubre el periodo completo de 2006 a 2021 son: Baja California y Chihuahua (desde 2010), Ciudad de México (2011), Coahuila, Guanajuato y Morelos (2012), Tabasco (2013), Campeche y Durango (2014), Chiapas, Hidalgo y Quintana Roo (2015), Zacatecas (2016), Jalisco y Yucatán (2018), Baja California Sur y Tamaulipas (2019).

¹⁸ Respuesta a solicitud de información 330030421001498.

¹⁹ Datos de 29 estados, con las solicitudes: Aguascalientes (010053521000087), Baja California Sur (031363121000059), Campeche (040086300008621), Chiapas (070124221000089), Chihuahua (080144521000122), Coahuila (051259000008321, Colima (060111121000058), Ciudad de México (090164121000446), Durango (101241100007821), Guanajuato (110194900027221), Guerrero (120208621000078), Hidalgo (130218400009521), Michoacán (160341821000069), Morelos (171237021000108), Nayarit (180374221000071), Nuevo León (19111721000189), México (423974), Oaxaca (201175021000069), Puebla (210425321000131), Quintana Roo (230465000009421), San Luis Potosí (241481821000119), Sinaloa (251264400008221), Tabasco (271473900010121), Tamaulipas (281231121000065), Tlaxcala (290532421000091), Sonora (261271921000115), Veracruz (301277600011121), Yucatán (310573821000071) y Zacatecas (320590621000072). Las entidades que no entregaron información fueron: Baja California (020058321000018), Jalisco (140280421000136) y Querétaro (221279021000094).

Gráfica. Expedientes por tortura. Elaboración propia con base en respuestas a solicitudes de información

(Elaboración propia CMDPDH)



Respecto a las autoridades señaladas, la FGR²⁰ indicó contar con 1,091 expedientes en contra de elementos de la SEDENA, 673 contra elementos de SEMAR y 14 contra elementos de la GN; cabe apuntar que en el 70% de las denuncias contra estas autoridades no se señala el año al que corresponden las investigaciones, generando una falta de información relevante. La mayoría de las fiscalías locales no entregaron información sobre las autoridades presuntamente responsables dentro de los expedientes.

A nivel local las autoridades informaron el registro de 14,813 probables víctimas contenidas en las denuncias²¹, de las que más del 48% se concentran en sólo tres entidades: Baja California, Chihuahua e Hidalgo. Además, tres de cada diez víctimas registradas corresponden a investigaciones abiertas en los últimos tres años. Se debe destacar que las autoridades reportan haber aplicado el Protocolo de Estambul²² en 1,780 ocasiones.

²⁰ Respuestas a solicitudes de información: 330024621000876, 330024621000877 y 330024621000878.

²¹ Las fiscalías de Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Yucatán no brindaron cifras respecto de las víctimas involucradas en las investigaciones. En el caso de Zacatecas, se incluyen también víctimas por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

²² La FGR no brindó información respecto a las víctimas señalando que el Registro Nacional de Víctimas de Tortura se encuentra en proceso de actualización. De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicada en junio de 2017, la PGR (hoy FGR) debería contar con la infraestructura tecnológica para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura a los 180 días de haberse publicado la Ley en la materia, sin embargo no fue sino hasta el 30 de noviembre de 2021 que la Fiscalía General expidió los Lineamientos de operación del RENA-DET (publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2021). Tales lineamientos brindan un plazo de 120 días para que se establezcan las condiciones técnicas y tecnológicas que permitan el correcto funcionamiento del Registro. No obstante, hasta agosto de 2022 no existe información pública respecto del Registro ni un marco temporal sobre su operación.

Los organismos de derechos humanos del país²³ acumulan un total de 39,268 quejas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el mismo periodo. Solo 24 organismos locales proveyeron cifras de las víctimas²⁴ contenidas en las quejas, en las cuales se contabiliza a 20,825 personas y 20 víctimas colectivas; se identifican además 107 víctimas indígenas, 117 extranjeras/migrantes y 22 con alguna discapacidad.

Respecto a los perpetradores, las policías estatales fueron mencionadas en 1,311 quejas, las policías municipales en 4,416, las fiscalías y procuradurías estatales en 3,482 y otras autoridades (entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Ministerial y la Policía Preventiva) en 12,110. Por su parte, la CNDH notificó que SEDENA se encuentra señalada en 108 quejas, FGR en 129, SEMAR en 66, la Policía Federal 114, y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en 4, tomando en consideración que una misma queja puede involucrar a varias autoridades²⁵.

Además, la CNDH informó²⁶ que entre 2006 y 2021 emitió 154 recomendaciones por el “hecho violatorio” de tortura, de las cuales solo 20 se tienen bajo el título de “Violaciones Graves” a los derechos humanos; adicionalmente, tiene registro²⁷ de 225 recomendaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes, 18 de las cuales se calificaron de “Violaciones Graves”. Sin embargo, el análisis y documentación de casos narrados en las recomendaciones, realizado por la CMDPDH, revelan que son 227 los documentos que en los que se presentan hechos constitutivos de tortura. Es decir 71 recomendaciones adicionales a las informadas por la CNDH a través de sus respuestas en la PNT.

Por su parte la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL, 2021), que es aplicada con el objetivo de generar estadísticas sobre la experiencia de las personas en reclusión a lo largo del proceso penal, así como su permanencia en los centros penales a nivel nacional, contempla a 210,680 personas. Para este análisis se examinaron los registros de personas detenidas de 2006 hasta julio de 2021 y que fueron arrestadas por alguna autoridad, lo que cubre aproximadamente 201,344²⁸ personas (5.7% mujeres y 94.3% hombres).

²³ Respuestas a solicitudes de información: CNDH (330030921000350), Aguascalientes (010054721000052), Baja California Sur (030078521000053), Campeche (040091400005121), Chiapas (070136421000049), Chihuahua (080159121000078), Coahuila (050309600004621), Ciudad de México (090165821000153), Durango (100184300005021), Guanajuato (110200000008521), Guerrero (120310621000040), Hidalgo (130226900005321), Jalisco (140293221000130), Michoacán (160352821000042), Morelos (170362622000030), Nayarit (180377521000040), Nuevo León (191118621000079), México (423985), Oaxaca (201172521000043), Puebla (210448321000064), Querétaro (220459121000045), Quintana Roo (231287300005021), San Luis Potosí (240477221000086), Sinaloa (250486100003821), Tabasco (270511300005621), Tamaulipas (280527421000035), Tlaxcala (291208821000047), Sonora (260502221000070), Veracruz (300563700005021), Yucatán (310586621000037) y Zacatecas (321103721000039). Los organismos de Baja California (020067821000049) y Colima (060114621000038) no brindaron información, mientras que Guanajuato, Morelos y Querétaro no dieron cifras de las quejas totales por tortura.

²⁴ Los organismos de derechos humanos que no indicaron cantidad de víctimas en las quejas por tortura son: la Nacional, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

²⁵ La FGR incluye las quejas ocurridas desde 2006, es decir cuando era PGR. Igualmente en la Policía Federal se contemplan las diferentes denominaciones que ha tenido de 2006 a 2021.

²⁶ Respuesta a solicitud de información 330030922000865.

²⁷ Respuesta a solicitud de información 330030922000866.

²⁸ Todos los datos presentados se hacen de acuerdo al factor de expansión de la encuesta para abarcar a la totalidad de la población en reclusión. Se excluyeron registros de gente que se entregó o fue detenida por vecinos, miembros de seguridad privada, en operativos conjuntos, etc., y solo se tomaron en cuenta respuestas efectivas (Sí/No), descartando opciones como “No sabe” o “No responde”.

De acuerdo con esta encuesta, los arrestos durante este periodo fueron realizados en su mayoría por policías estatales ministeriales o judiciales (39%), seguidas de policías municipales (29%) y policías estatales (17%). Los agentes policiales de la FGR (6%) y policías federales (5%) cubrieron otra porción de los arrestos, mientras las fuerzas armadas combinadas – Ejército, Guardia Nacional y Marina– completan las cifras, al cubrir el 5% de las detenciones.

Siguiendo la narrativa, en la que primero se detiene a las personas y posteriormente son sometidas a tortura, entre las prácticas con mayor incidencia en México que reporta la población en reclusión se encuentran diversas prácticas de tortura psicológica, seguidas de torturas físicas y torturas sexuales. En la siguiente tabla se indica la cantidad aproximada de víctimas para los actos recogidos en la ENPOL.

Tabla. Incidencia de prácticas de tortura de acuerdo con la ENPOL 2021

(Elaboración propia CMDPDH)

Prácticas de tortura psicológica	
Incomunicación y aislamiento	87,482
Amenazas de incriminación o cargos falsos	73,445
Amenazas físicas	66,210
Dar vueltas en el automóvil sin dirigirse a un lugar específico	62,755
Cubrir o vendar ojos o cabeza	55,849
Amenazas de muerte	48,114
Amenazas de hacer daño a la familia	9,373
Prácticas de tortura física	
Golpes con puños y patadas	71,414
Golpes con armas u otros objetos	38,922
Aplastamiento de partes del cuerpo	39,013
Asfixia por agua o tehuacanazos	28,863
Asfixia por bolsa de plástico	41,381
Descargas eléctricas	22,744
Quemaduras	5,353
Tortura con armas de fuego	3,202
Tortura con armas blancas	2,937
Prácticas de tortura sexual	
Desnudez forzada	52,812
Golpes, descargas eléctricas o aplastamiento de órganos sexuales	19,590
Acoso, manoseo e intentos de violación	7,160
Violación sexual	3,690

En el caso de la tortura física, el 38% de las mujeres reportaron haber experimentado este tipo de práctica frente al 48% de los hombres. Respecto de la tortura sexual, el 30% de las mujeres reportó haber sido víctima de alguna acción de este tipo frente al 33% de los hombres. Los datos de tortura psicológica indican que el 69% de las mujeres fue víctima de este tipo de actos, mientras que el 65% de los hombres afirmó lo mismo. Puede verse que de las distintas formas de tortura, la de tipo psicológica es más prevalente en mujeres que en hombres, y que existen diferencias sistemáticas de género en la manera en que las personas son sometidas a estas prácticas degradantes.

Es importante notar que los actos de tortura están asociados con las autoridades que realizan la detención y traslado de las personas. Las instituciones que tienden a tardar más en entregar a las personas detenidas son las del orden federal (principalmente aquellas de corte militar), como se muestra en la tabla más adelante (los porcentajes faltantes indican “no sabe/no respondió”). Destaca que en el 13% de las ocasiones, elementos de la Marina tardaron más de 72 horas en llevar a las personas ante autoridades judiciales.

Tabla. Tiempo transcurrido entre la detención y la puesta a disposición de las personas según la autoridad responsable, de acuerdo con la ENPOL 2021

(Elaboración propia CMDPDH)

Autoridad	Hasta seis horas	Más de seis
Marina	31.4%	63.5%
Ejército	41.0%	54.8%
Policía Federal	50.7%	44.9%
Policía Federal Ministerial	59.2%	33.5%
Guardia Nacional	66.4%	32.0%
Policía Municipal	66.0%	28.0%
Policía Estatal	68.8%	26.4%
Policía Estatal Ministerial o Judicial	68.1%	24.5%

Conociendo la incidencia de las prácticas de tortura durante estos trayectos, queda claro que la dilación en la puesta a disposición no es fortuita y se correlaciona con las autoridades responsables de la detención, dando cuenta de las malas prácticas perpetradas por los cuerpos militares, en las que los tiempos altos de retención se dan con mayor frecuencia. En la tabla a continuación se presenta el porcentaje de personas que indicaron ser víctimas de actos de tortura, desagregando las tres autoridades con mayores porcentajes.

Tabla. Porcentaje de incidencia de prácticas de tortura durante el traslado a puesta a disposición según autoridad responsable, de acuerdo con la ENPOL 2021

Patadas y puñetazos	
Marina	62%
Ejército	53%
Policía federal	49%

Incomunicación	
Marina	68%
Policía Federal	62%
Ejército	57%

Golpes con objetos	
Marina	50%
Ejército	38%
Policía Federal	31%

Amenaza de cargos falsos	
Marina	60%
Policía Federal	52%
PF Ministerial	49%

Asfixia o ahorcamiento	
Marina	49%
Ejército	34%
PF Ministerial	33%

Amenaza de daños físicos	
Marina	69%
Ejército	52%
Policía Federal	49%

Asfixia por agua	
Marina	38%
Ejército	28%
Policía Federal	25%

Amenazas de muerte	
Marina	64%
Ejército	47%
Policía Federal	40%

Amenazas de muerte	
Marina	33%
Ejército	20%
Policía Federal	19%

Amenazas a la familia	
Marina	50%
Policía Federal	37%
Ejército	33%

No está de más hacer hincapié en que para todos los tipos de tortura incluidos en la encuesta, la Marina es la institución que más uso hace de estas prácticas, seguida de otras instituciones federales (Ejército, Policía Federal y PF Ministerial). Además, sabemos que una persona detenida atraviesa diversos tipos de tortura desde su detención hasta su puesta a disposición ante las autoridades competentes. Así, no sorprende que los traslados se demoren por muchas horas o, en algunas ocasiones, incluso varios días, configurando contextos de vulnerabilidad para las personas detenidas antes de que formalmente tengan contacto con el sistema de justicia.

De acuerdo con la documentación de casos realizada por la CMDPDH mediante la plataforma I-Doc, la CNDH ha emitido 227 recomendaciones entre 2006 y 2021 donde se narran hechos constitutivos de tortura en contra de al menos 1,038 víctimas²⁹. De estas, se identifica a 384 hombres, 102 mujeres, 32 personas de quienes no se conoce su sexo y 519 consideradas víctimas colectivas en 74 casos. Además, se ubica al menos a 135 personas extranjeras como víctimas de tortura, aunque solo se establece la nacionalidad de 7 de ellas: 3 estadounidenses, 3 hondureñas y 1 salvadoreña (se indica también que hay al menos 283 personas mexicanas, pero no se estableció la nacionalidad en el resto de los casos).

Hablar de la tortura como un método de investigación se encuentra asociado a la necesidad de comprobar algo. Desde 2006 con el inicio de la estrategia de seguridad militarizada, basada en el combate frontal al narcotráfico, las instituciones de seguridad y principalmente aquellas de corte militar, se vieron obligadas a comprobar resultados que justificaran su despliegue. En este sentido, las razones que derivaron en la victimización de al menos 329 personas se encontraron asociadas al cumplimiento de operaciones dirigidas o de erradicación de enervantes, así como operativos conjuntos; es decir personas que se concluyó que son inocentes, que fueron torturadas en el cumplimiento de órdenes concretas, en las que de acuerdo con el proceder militar se tendrían que haber identificado como blancos, sin dar cabida a los errores, a la confusión o a la casualidad, donde al menos a 132 personas se les inició un proceso penal. La segunda razón más común para la tortura fue la alegación de participación en delitos contra la salud, pues fue la situación de 248 personas de las contenidas en las recomendaciones revisadas; en este caso, a 87.5% de las víctimas se les fabricó algún delito.

²⁹ Se debe destacar que para estos datos se tuvieron que leer la totalidad de las recomendaciones emitidas por la CNDH desde 2006 hasta 2021, con la intención de poder analizar los casos y hacer una calificación adecuada de los hechos. Esto aplica también para los datos en las siguientes secciones de desaparición y asesinato.

En el caso de 223 personas víctimas de tortura se alegó que portaban armas, y a 189 de ellas se les imputó formalmente. Otra de las razones que alegaron las autoridades fue que habrían cometido algún crimen o robo, aunque de las 169 víctimas, solo se les abrió proceso penal a 133, mediante pruebas obtenidas bajo tortura. También se indicó que 157 personas presuntamente participaron en actividades relacionadas con el crimen organizado, siendo esta la razón en la que mayor porcentaje de personas fueron formalmente imputadas, mediante pruebas obtenidas bajo tortura, con 92.4%. En otras 156 ocasiones se señaló que las personas habían sido detenidas en supuesta flagrancia, y a 130 se les inició un proceso penal al respecto.

Otro de los argumentos de las autoridades respecto a su contacto con 140 víctimas de tortura es que se actuó en defensa contra una agresión; a 68 de ellas se les imputó algún delito. En el caso de 110 personas, las autoridades alegaron, para justificar su detención, que tenían una actitud o vehículo sospechoso, se les sometió a tortura y al 84.6% de estas víctimas se les abrió formalmente un proceso penal. Igualmente, 109 víctimas fueron torturadas en el marco de patrullajes o retenes, y a 71 de ellas se les acusó de algún delito. Finalmente, en 107 ocasiones las autoridades dijeron haber actuado a partir de datos proporcionados por algún tercero anónimo, lo que derivó en 83 personas procesadas.

En total, poco más de la mitad de las personas que fueron sometidas a tortura tuvieron que enfrentar una imputación de delitos (571). Los delitos con mayor número de imputaciones son los que tienen que ver con armas: portación de armas de uso exclusivo del Ejército, acopio de armas, posesión de cartuchos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; delitos que acumularon 264 víctimas imputadas.

En segundo lugar se encuentran los delitos contra la salud, con 256 víctimas acusadas (más que la cifra de víctimas que supuestamente fueron detenidas por ese motivo, de acuerdo con las autoridades). La delincuencia organizada o asociación delictuosa fue la imputación que recibieron 176 personas. Cabe apuntar que varias de estas víctimas fueron imputadas por más de un delito, pues entre las tres acusaciones mencionadas se abarca a 400 personas.

Estas cifras denotan un patrón de conducta orientado a demostrar resultados a través de cualquier medio, incluyendo el uso de la tortura como método de investigación y la fabricación de culpables en remplazo del debido proceso. Esto, en medio de un contexto de distintas violencias en el país en el que las autoridades han decidido criminalizar a la población civil, en lugar de realizar labores de seguridad ciudadana o bien, si es necesario, recurrir a una declaración de estado de excepción o de conflicto armado interno que haga frente a las situaciones de violencia.

Respecto de los tipos de victimización que atravesaron estas personas, se establece que 687 fueron víctimas de algún tipo de tortura psicológica (al menos 584 recibieron amenazas, 165 fueron denigradas mediante insultos y 148 sufrieron alguna humillación³⁰), mientras que 268 personas fueron víctimas de algún tipo de violencia o tortura sexual (incluyendo desnudez, toques eléctricos en los genitales, tocamientos o violación). La tortura más común fue la tortura física con 818 víctimas contabilizadas (718 recibieron golpes, 255 fueron víctimas de asfixia, 215 recibieron descargas eléctricas, a 121 les aplicaron *waterboarding*, entre otras prácticas³¹).

Aunado a estas victimizaciones, las personas también sufrieron otros abusos por parte de las autoridades. Destacando que la tortura sobre 721 víctimas inició con una detención arbitraria; a la par de 242 personas retenidas ilegalmente; 168 personas víctimas de desaparición; 112 personas que sufrieron algún tipo de fabricación de pruebas en su contra (incluyendo plantación o decomiso de drogas o armas, firma de una confesión o falsificación de las circunstancias de la muerte); además de 38 personas asesinadas como resultado de su interacción con las autoridades: en 16 casos estuvo involucrado el Ejército, mientras la Marina y las policías estatales se relacionan con 9 casos de homicidio cada uno.

Respecto de las autoridades involucradas en los hechos victimizantes que incluyen tortura, las FFAA acumulan más de la mitad de las víctimas, pues entre ellas se contabiliza a 523 personas víctimas; el Ejército directamente es responsable de 341 y la Marina de 182. De las víctimas que interactuaron con el Ejército, 248 tuvieron una detención ilegal, 87 fueron desaparecidas y 39 sufrieron fabricación de pruebas. Respecto de las víctimas de la SEMAR, 172 fueron detenidas ilegalmente, a 35 se les fabricaron pruebas y 32 fueron desaparecidas.

³⁰ Por ejemplo: Orinarse encima de la víctima, amarrarlas, obligarlas a comer del piso, a gatear, a bailar mientras eran insultadas o denigradas, a comer suciedad, dormir desnudos en espacios fríos y húmedos, a defecarse u orinarse encima, cubetadas de agua fría, entre muchas otras formas de humillación.

³¹ Por ejemplo: Espinas de maguey en los dedos de las manos y los pies, pellizcos o cortes con pinzas en diferentes partes del cuerpo, camas de nopales o cactus, objetos punzocortantes por los oídos, privación del sentido de la vista, tablas con clavos sobre el cuerpo, etc.

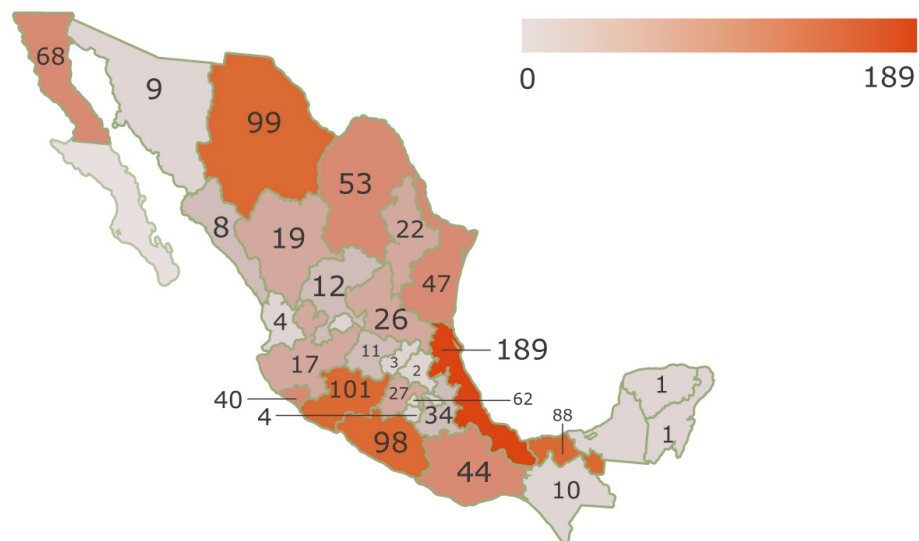
Por su parte, la Policía Federal se encuentra involucrada en los hechos victimizantes respecto de 374 personas sobrevivientes de tortura, en 198 ocasiones las victimizaciones de la PF comenzaron con una detención ilegal, además de que 65 personas fueron detenidas al interior de su hogar, mientras que a 36 víctimas se les fabricaron pruebas y 33 fueron desaparecidas.

Las policías estatales son responsables de cometer actos de tortura en contra de 177 personas, misma cantidad acumulada por las secretarías de seguridad pública estatales (entre ambas instituciones se contabilizan 312 víctimas, lo que indica una superposición parcial). El Instituto Nacional de Migración se encuentra relacionado con hechos de tortura en contra de 135 personas, la mayoría de ellas migrantes con la excepción de dos víctimas mexicanas. Las policías estatales ministeriales acumulan 86 personas víctimas de tortura y las policías estatales preventivas, 44. Las policías municipales figuraron en actos de tortura en contra de 39 personas, y otras 31 víctimas lo fueron por parte de las autoridades dentro de centros penitenciarios.

De las 32 entidades del país y de acuerdo con la información contenida en las recomendaciones de la CNDH, se registraron actos de tortura en 29 estados³², cuyas víctimas se distribuyen como puede observarse en el mapa a continuación. Veracruz es la entidad que más víctimas reporta, con 189, seguida de Michoacán (101), Chihuahua (99) y Guerrero (98).

Mapa. Distribución de las víctimas de hechos constitutivos de tortura por entidad(es) de ocurrencia en recomendaciones de CNDH de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc

(Elaboración propia CMDPDH)

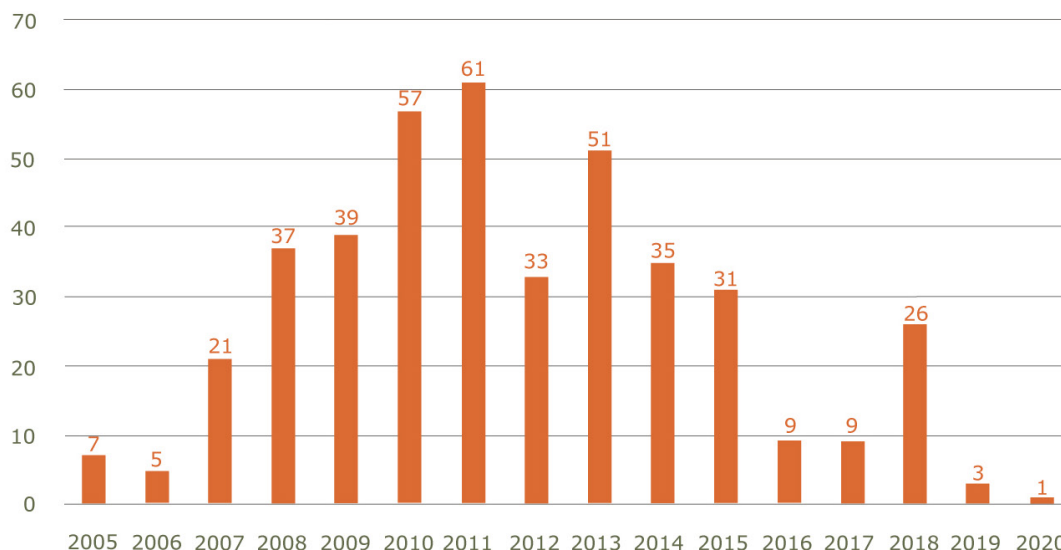


³² Las entidades que no registraron este tipo de victimización son: Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche.

Finalmente, las recomendaciones de CNDH por tortura refieren a hechos que se distribuyen en el tiempo de acuerdo a lo mostrado en el siguiente gráfico. Cabe tomar en cuenta que las investigaciones para la realización de las recomendaciones suele tomar varios meses y en algunos casos varios años, además de que las quejas también pueden presentarse tiempo después de los eventos que se reportan, por lo que hechos referentes a los años más recientes probablemente se verán reflejados en recomendaciones posteriores.

Gráfica. Cantidad de recomendaciones de CNDH que narran hechos constitutivos de tortura, de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc

(Elaboración propia CMDPDH)



Estos datos apuntan al entrelazamiento de diversas victimizaciones al que se somete a las personas cuando se encuentran bajo responsabilidad de las autoridades en diferentes escenarios, que les colocan en situaciones de vulneración y sin el amparo de ley, y que finalmente llevan a imputaciones de delitos en procesos irregulares para que las autoridades puedan alegar “resultados” en sus labores de seguridad. Como se señaló anteriormente, la tortura es una práctica sistemática en diversas instituciones, y en los casos analizados por la CMDPDH puede observarse que se expresa en una variedad de prácticas que sustraen a las personas del amparo de la ley y se usan para fabricar culpables, supliendo los procesos legales para los que las autoridades no están capacitadas adecuadamente, lo que deriva en vulneraciones a los derechos de las personas.

2.2. Desaparición, una crisis que no se detiene

La desaparición de personas no es un fenómeno nuevo, pues a lo largo de la historia ha sido usada especialmente desde regímenes autoritarios como una estrategia para acallar la disidencia interna, no sólo al actuar directamente contra las personas que son desaparecidas sino que también tiene un efecto amedrentador contra el resto de la sociedad. Esto se vio claramente en el siglo XX en América Latina durante las dictaduras militares que desaparecieron a miles de personas y cuyos procesos de esclarecimiento continúan hoy en día, e igualmente se vivió en la segunda mitad del siglo pasado en México que, aunque formalmente democrático, atravesó un periodo conocido como “guerra sucia”³³ donde cientos de personas fueron desaparecidas por su oposición ideológica con el régimen político. Sin embargo, con la escalada de violencia derivada de la estrategia de seguridad militarizada iniciada a finales 2006 y que continúa vigente a la fecha de realización de este texto, el fenómeno de las desapariciones cobró fuerza con características particulares y se ha agudizado con el paso de estos años, rebasando en 2022 la cifra oficial de más de 100,000 personas de las que no se conoce su suerte o ubicación.

La desaparición se define como la ausencia de información respecto al paradero de una persona, pudiendo ser de dos tipos: a) de manera transitoria por un periodo hasta su localización o identificación, o b) de manera continuada sin que se logre conocer su suerte o destino.

Las primeras incluyen personas que son localizadas con vida (ya sea que sufrieron un arresto, privación ilegal de la libertad u otros eventos que les impiden o implican falta de contacto con sus personas cercanas), así como localizaciones sin vida en fosas comunes, fosas irregulares o en servicios médicos forenses, entre otros lugares, y en los que se logra la identificación de la persona, generalmente a través de pruebas genéticas o cuestionarios *ante mortem/post mortem* con apoyo de las familias.

Mientras que las segundas incluyen a personas que se encuentran con vida pero se desconoce su paradero porque se encuentren retenidas contra su voluntad en situaciones de trata, abuso o en centros clandestinos de reclusión, entre otras. Además, personas sin vida cuyos cuerpos o restos no han sido localizados o que han podido ser recuperados pero no han sido procesados para

³³ Se conoce como “guerra sucia” a un periodo de represión política autoritaria comprendido entre 1965 y 1982 (aunque los años pueden variar de acuerdo a las interpretaciones históricas) dirigido contra expresiones de disidencia ideológica de izquierda organizadas principalmente en guerrillas rurales y urbanas, y que fue instrumentalizado a través del Ejército y la Dirección Federal de Seguridad. Se tienen documentados decenas de casos de personas detenidas y torturadas en instalaciones oficiales y de quienes se desconoce su paradero posterior, así como testimonios de cientos de personas que reportan familiares desaparecidos.

su identificación; debe tenerse presente que actualmente existen alrededor de 52,000 cuerpos³⁴ bajo resguardo de las fiscalías y servicios forenses del país o en fosas comunes, la mayor parte de ellos acumulados en la última década, y a quienes no se ha podido devolver su identidad; fenómeno conocido como la crisis forense.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPДНО)³⁵ que comenzó a operar en 2019, del total de reportes históricos registrados, aproximadamente 60% ya se han localizado (de estos, más del 90% se localizan con vida). Respecto de las desapariciones continuadas, entre enero de 2006 y diciembre de 2021 se registraron oficialmente 80,603 personas reportadas como desaparecidas en el país, que siguen sin ser localizadas³⁶.

En 2006 desaparecieron 255 personas que siguen sin ser localizadas, y la cifra anual fue creciendo de manera exponencial hasta alcanzar 5,150 reportes en 2011; entre 2010 y 2016 la cifra se mantuvo entre 4,000 y 6,000 reportes por año, pero después se observa otro periodo de 2017 a 2022 en que los reportes anuales oscilan entre los 7,500 y los 9,700. Esto quiere decir que más de la tercera parte de las personas cuyo paradero se desconoce en los últimos 15 años habrían desaparecido entre 2019 y 2021 (27,788 personas). A pesar de que aproximadamente 3 de cada 4 personas reportadas como desaparecidas son hombres (61,314 casos), sabemos que las dinámicas de desaparición son distintas de acuerdo al sexo de las víctimas. Una de cada cuatro mujeres tenía entre 15 y 19 años al momento de la desaparición (4,937 casos) y el 56% de las mujeres es menor de 25 años cuando desaparece.

Por su parte, el rango de edad más común para los hombres es el de 25 a 29 años cumplidos al momento de la desaparición (9,316 casos), y el 54.8% se concentran entre los 20 y los 39 años.

En todos los rangos de edad desaparecen más hombres que mujeres excepto en el de 10 a 14 años donde el 60% de los casos corresponde a niñas. Puede verse que las mujeres desaparecen en edades más vulnerables a diversos tipos de violencias, sobre todo de carácter sexual, mientras los hombres desaparecen en edades productivas, lo que indica que los mecanismos y objetivos de las desapariciones -y muy probablemente los perpetradores- varían de acuerdo al sexo de las víctimas y por lo tanto deben investigarse y esclarecerse sus particularidades con perspectiva de género.

³⁴ De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, no existe un censo oficial de los cuerpos sin identificar, mientras que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos calculó para 2021 la cifra de 52,000 cuerpos, que ha sido retomada tanto por la CNB como por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, entre otros organismos. Ver: <https://comisionacionaldebúsqueda.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/CNB-Informe-CED-Espanol.pdf>.

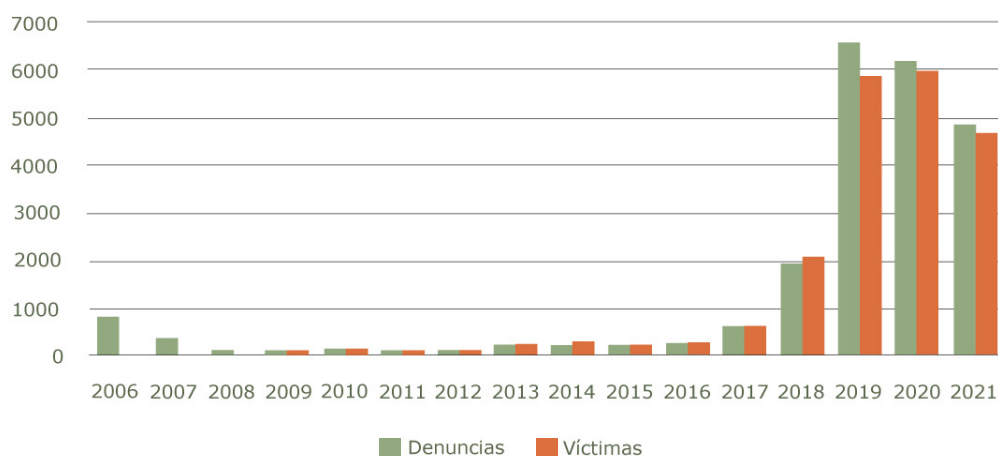
³⁵ Disponible en <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral>, datos consultados y actualizados al 24 de abril de 2022.

³⁶ Asimismo, en los primeros 11 meses de 2022 se tiene registro de 8,121 personas cuyo paradero se desconoce. Datos consultados el 24 de noviembre de 2022.

El RNPDO se integra de casos que provienen de las instituciones pero también incluye reportes ciudadanos sin la necesidad de que existan denuncias penales. Respecto de estas últimas, la CMDPDH realizó solicitudes de información a las fiscalías federal y estatales sobre expedientes por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares entre enero de 2006 y noviembre de 2021. En las respuestas recibidas³⁷ se indica la existencia de al menos 26,397 denuncias que involucran a 27,844 víctimas de desaparición, de las cuales 3,422 (12.3%) serían víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con los indicios o resultados de la investigación penal. Del total de víctimas en las denuncias penales, más de la tercera parte se encuentran en expedientes abiertos en los últimos tres años (9,709 víctimas de 2019 a 2021), pero en lo que respecta a las víctimas de desaparición forzada, esta cifra sube al 57.7% (1,974 víctimas en ese periodo). Los datos por año se muestran en la siguiente gráfica (algunas fiscalías no entregaron la información desagregada por años por lo que no se muestra la totalidad de datos).

Gráfica. Cantidad de denuncias y víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de acuerdo a fiscalías y procuradurías estatales y nacional

(Elaboración propia CMDPDH)



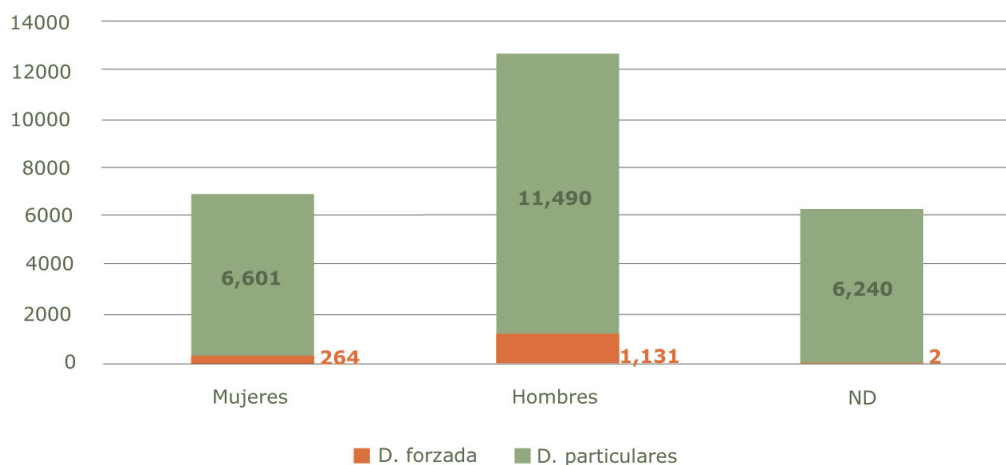
³⁷ Solicitudes de información: FGR (330024621000871), Aguascalientes (010054821000107 y 010054821000106), Baja California (021381021000166 y 021381021000165), Baja California Sur (030075421000084 y 30075421000083), Campeche (040081000009421 y 040081000009321), Chiapas (070136721000110 y 070136721000109), Chihuahua (080139722000143 y 080139721000213), Coahuila (050096900014521 y 050096900014321), Colima (061903921000093 y 061903921000092), Ciudad de México (092453821000693 y 092453821000692), Durango (101126500009821 y 101126500009621), Guanajuato (112093900034121 y 112093900034021), Guerrero (120203121000103 y 1202031210001029), Hidalgo (130213100041521 y 130213100041421), Jalisco (140255821000631 y 140255821000628), Michoacán (162155721000101 y 162155721000100), Nayarit (180369321000081 y 180369321000080), Nuevo León (191841721000149 y 191841721000148), México (423979 y 423976), Oaxaca (201172621000095 y 201172621000093), Puebla (210421522000071 y 210421521000240), Sinaloa (250483000010721 y 250483000010621), Tamaulipas (281197021000119 y 281197021000118), Tlaxcala (291213221000091 y 291213221000090), Sonora (261156221000183 y 261156222000157), Yucatán (310568621000110 y 310568621000109) y Zacatecas (321103821000090 y 321103821000089). Las instituciones que no brindaron información son: Morelos (172237721000119 y 172237721000118), Querétaro (221277421000100 y 221277421000099), Quintana Roo (231286200011021 y 231286200010921), San Luis Potosí (240469821000118 y 240469821000117), Tabasco (270511400010621 y 270511400010521), Veracruz (301146700012421 y 301146700012321).

La FGR reconoció que existen 39 expedientes de denuncia en contra de la SEDENA³⁸, 7 en contra de personal de la SEMAR³⁹ y 1 contra de la Guardia Nacional⁴⁰ por desaparición forzada. Del total de estas investigaciones solo 9 se encuentran judicializadas. En estos expedientes se identificaron 245 víctimas, de las cuales hay 20 mujeres y 225 hombres.

Las fiscalías y procuradurías estatales reconocen al menos 25,737 víctimas de desaparición, desagregado como muestra la gráfica a continuación, de las cuales habría al menos 825 niñas y adolescentes así como 645 niños y adolescentes, además de que habría 21 mujeres y 29 hombres con discapacidad, 18 mujeres y 90 hombres extranjeros y una mujer migrante.

Gráfica. Víctimas contenidas en las denuncias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de acuerdo a fiscalías y procuradurías estatales

(Elaboración propia CMDPDH)



³⁸ Respuesta a solicitud de información 330024621000872, del 4 de febrero de 2022.

³⁹ Respuesta a solicitud de información 330024621000873, del 4 de febrero de 2022.

⁴⁰ Respuesta a solicitud de información 330024621000874, del 4 de febrero de 2022.

De las denuncias recibidas en la FGR (todas por desaparición forzada), solamente 40 fueron consignadas o judicializadas, representando un 2.3%, mientras que de los expedientes abiertos en las fiscalías estatales, sólo se habrían consignado o judicializado 94 por desaparición forzada y 206 por desaparición cometida por particulares, un 1.2% del total, lo cual da cuenta de la impunidad imperante. El Consejo de la Judicatura Federal⁴¹ ha dictado 52 sentencias a nivel federal, de las cuales solo 38 han sido condenatorias.

Es importante resaltar que la mayoría de instituciones sistematizan su información con posterioridad a 2006, por lo que los datos son parciales⁴². De acuerdo con un ejercicio de la CMDPDH respecto a las desapariciones del año 2021, alrededor de 36% de las desapariciones registradas en RNPDO tendrían una denuncia en alguna de las fiscalías del país (Coca, 2022). A esto hay que sumarle el subregistro que se deriva de la desconfianza con las instituciones, la posible colusión de las autoridades en los hechos y los altos grados de impunidad, lo que llevaría a algunas familias a no denunciar ni reportar la desaparición de una persona por los medios oficiales.

Además de la desaparición como delito, la desaparición forzada constituye una violación a derechos humanos y crimen internacional que por las características con las que se comete puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Por ello, se indagó con estos organismos la cantidad de quejas por este fenómeno, acumulando un total de 1,830 en el periodo analizado. La CNDH⁴³ registró 404 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas presuntamente cometidas por las autoridades federales entre 2006 y noviembre de 2021, de los cuales el 43.7% señala a SEDENA como autoridad responsable, seguida de la SEMAR con el 25.8% de las menciones, mientras que en sus breves años de vida la Guardia Nacional es responsable del 1.8%. Aunado a lo anterior, la CNDH emitió⁴⁴ 37 recomendaciones por el "Hecho Violatorio 'Desaparición forzada o involuntaria de personas'" entre 2006 y 2021, de las cuales 17 se encuentran bajo el título de violaciones graves a los derechos humanos.

⁴¹ Respuesta a solicitud de información 330030421001497.

⁴² Año a partir del cual entregaron información las fiscalías cuando es posterior a 2006: Aguascalientes (2018), Baja California (2017), Baja California Sur (2016), Campeche (2018), Chiapas (2018), Chihuahua (2010), Ciudad de México (2019), Colima (2019), Guanajuato (2013), Guerrero (2018), Hidalgo (2018), Michoacán (2017), Nuevo León (2018), México (2018), Oaxaca (2017), Puebla (2018), Tamaulipas (2018), Tlaxcala (2020), Sonora (2015), Yucatán (2018) y Zacatecas (2013).

⁴³ Respuesta a solicitud de información 330030921000349.

⁴⁴ Respuesta a solicitud de información 330030922000867.

A nivel estatal, los organismos de derechos humanos de 31 de los 32 estados de la república⁴⁵ reportaron haber recibido 1,426 quejas por desaparición forzada de 2006 a noviembre de 2021, una tercera parte de ellas entre 2019 y 2021 (480 quejas). Estos organismos identificaron al menos a 1,372 víctimas, de las cuales al menos 364 serían mujeres (registran 76 adultas y 10 niñas o adolescentes) y 876 serían hombres (243 adultos y 21 niños o adolescentes de acuerdo con la información disponible). También registran al menos 4 mujeres y 10 hombres indígenas, 2 mujeres y 4 hombres extranjeros, 2 hombres migrantes, así como 1 mujer y 2 hombres con alguna discapacidad entre las víctimas reportadas. Respecto de las autoridades responsables, los organismos señalan en 326 quejas a personal de las fiscalías estatales, en 276 a miembros de las policías municipales, en 253 a elementos de las policías estatales y en 209 quejas a otras autoridades.

De acuerdo con la sistematización realizada por la CMDPDH, que discrepa con la información de la CNDH, esta última emitió 102 recomendaciones por casos que involucran desaparición de personas entre 2006 y 2021. En estas recomendaciones la CNDH da cuenta de al menos 375 víctimas, de las cuales 186 son hombres y 33 mujeres, en 27 casos no se da a conocer el sexo de la víctima, mientras que hay 112 víctimas colectivas en 33 hechos; se pudo además identificar a 79 víctimas mexicanas, 11 hondureñas, 4 estadounidenses, 2 nicaragüenses y 1 guatemalteca.

Cabe apuntar que también se encuentra el caso de Allende⁴⁶, Coahuila, en marzo de 2011, donde se suscitaron 38 desapariciones forzadas y en donde se incluye la desaparición continuada de 300 personas llevada a cabo por el grupo delictivo de Los Zetas. Sin embargo, debido a la escasa información respecto de estas víctimas, incluyendo la cantidad exacta de personas en esta situación, así como el hecho de que se atribuya incorrectamente la responsabilidad a personas integrantes del crimen organizado, y solo al Estado por la falta de protección, las 300 víctimas de desaparición continuada no se incluyen en el análisis de este apartado.

Es relevante señalar que tres cuartas partes de las desapariciones comienzan con una detención arbitraria por parte de las autoridades, pues de las 375 víctimas de desaparición, en 282 se reporta esta violación añadida, lo cual indica que los agentes estatales no cuentan con los requerimientos legales para tener a las víctimas bajo su custodia, lo que desencadena una serie de violaciones que acompañan este acto.

⁴⁵Solicitudes de información: Aguascalientes (010054721000051), Baja California (020067821000048), Campeche (040091400005021), Chiapas (070136421000048), Chihuahua (080159121000077), Coahuila (050309600004521), Colima (060114621000037), Ciudad de México (090165821000152), Durango (100184300004921), Guanajuato (110200000008421), Guerrero (120310621000039), Hidalgo (130226900005221), Jalisco (140293221000129), Michoacán (160352821000041), Morelos (170362621000038), Nayarit (180377521000039), Nuevo León (191118621000078), México (423980), Oaxaca (201172521000042), Puebla (210448321000063), Querétaro (220459121000044), Quintana Roo (231287300004921), San Luis Potosí (240477221000085), Sinaloa (250486100003721), Tabasco (2705113000055219), Tamaulipas (280527421000034), Tlaxcala (291208821000046), Sonora (260502221000069), Veracruz (300563700004921), Yucatán (310586621000036) y Zacatecas (321103721000038). Baja California Sur (030078521000052) no brindó información señalando que debían consultarse sus informes anuales. Algunos organismos entregaron información parcial al no tener registros sistematizados desde 2006; los casos son: Baja California (2015), Chihuahua (2014), Michoacán (2010), Querétaro (2009), Quintana Roo (2009), San Luis Potosí (2009), Sinaloa (2009), Tabasco (2013), Veracruz (2012).

⁴⁶Recomendación 10VG/2018, disponible en <https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-10-vg2018>.

En 203 ocasiones la desaparición se acompañó de golpes contra las víctimas y en 168 casos se registran actos de tortura y tratos crueles y degradantes, lo que revela la alta vulneración en que se coloca a las personas cuando son sustraídas de esta forma al no respetarse su integridad física y psicoemocional. Adicionalmente, la desaparición de 100 personas culminó con su asesinato y en algunos casos posterior descubrimiento del cuerpo de la víctima, derivando así en consecuencias irreparables que truncan una vida y trastocan a familias y comunidades de forma permanente.

De acuerdo con el contenido de las recomendaciones analizadas por la CMDPDH, 145 víctimas fueron desaparecidas por haber cometido un crimen, siendo esta la razón más frecuentemente citada como justificación de la detención por parte de las autoridades. Un centenar de estas víctimas fueron acusadas de participar en algún delito, de los cuales en 72 ocasiones se les vinculó a delitos contra la salud y en 32 casos las autoridades acusaron que las víctimas pertenecían al crimen organizado. El resto de los casos se justificaron en actos del crimen organizado en que las personas pudieron ser víctimas colaterales.

Adicionalmente, en 73 ocasiones se justificó la victimización de las personas con la alegación de que portaban armas. Todo lo anterior concuerda con las imputaciones de delitos, ya que en 92 casos se iniciaron carpetas o averiguaciones en contra de las víctimas de desaparición, siendo la acusación más común la de delitos contra la salud (61 procesos), seguido por la posesión de armas o cartuchos (50 imputaciones) y en tercer lugar la acusación de delincuencia organizada o asociación delictuosa (31 casos); el resto de las investigaciones aluden a secuestros, robo de vehículos u otros delitos.

Después de la supuesta comisión de ilícitos, la razón más frecuente para la victimización en casos de desaparición forzada son los diversos operativos llevados a cabo por las autoridades, pues 78 casos corresponden a desapariciones en el marco de operativos conjuntos, operaciones dirigidas u operaciones de erradicación de enervantes. Este tipo de operativos implican una planeación y control de las acciones llevadas a cabo por los elementos de las fuerzas de seguridad de manera tal que las desapariciones (y el resto de las victimizaciones) realizadas en estas actividades no pueden considerarse fortuitas ni simples daños colaterales, sino como parte de una política específica y táctica, dirigida a justificar los resultados de estas mismas acciones.

En 43 casos la razón de la victimización apuntó a que se consideró que la persona actuaba de manera sospechosa o iba a bordo de un vehículo sospechoso, lo cual indica que las autoridades actúan arbitrariamente, pues no hay elementos que definan la sospecha ni tampoco un trabajo de inteligencia que permita recabar elementos en firme para que los agentes del estado lleven a cabo sus labores con apego a los estándares legales y del debido proceso.

También es común que se alegue que se obtuvo “información anónima” como razón para la actuación de los elementos de las fuerzas de seguridad (30 víctimas de desaparición fueron clasificados en este argumento), aunque de las narraciones de los casos resulta poco convincente que ese haya sido el detonante de los actos de las autoridades, ya que se describen acusaciones que no se sostienen en elementos materiales ni en evidencia de algún otro tipo.

Respecto de las personas perpetradoras, 106 fueron víctimas de organizaciones criminales, y en la mayoría de esos casos se indica que fueron por razones desconocidas. Sin embargo, al menos 46 de estas personas fueron detenidas arbitrariamente por las autoridades y en 47 casos se desconoce su paradero hasta el momento de la recomendación, es decir, que se constituyeron como desapariciones continuas; en 57 ocasiones las víctimas fueron localizadas sin vida y en dos ocasiones las víctimas fueron liberadas con vida.

Las FFAA en conjunto son el perpetrador más común, al acumular 173 víctimas. De ellas, 98 corresponden al Ejército, mientras la Marina acumula 75 víctimas; además, se identifican a 60 víctimas de desaparición a manos de las policías municipales, las policías estatales registran 39 desapariciones forzadas y las corporaciones policiales federales acumularon 40 víctimas. El siguiente cuadro reúne la cantidad de víctimas de los diferentes tipos de desapariciones, así como el porcentaje que representan para cada tipo de autoridad

Tabla. Víctimas de desaparición por categoría y autoridad, en cantidad y porcentaje, de acuerdo a la sistematización de datos en la plataforma I-Doc

	Desaparición transitoria						Desaparición continuada	Tota	
	En arresto		Liberada		Sin vida				
	#	%	#	%	#	%	#	%	#
Ejército	44	44.90	29	29.59	12	12.24	13	13.27	98
Marina	10	13.33	8	10.67	20	26.67	37	49.33	75
Policía Federal	28	70	6	15	1	2.5	5	12.5	40
Policía Estatal	7	17.95	3	7.69	11	28.21	18	46.15	39
Policía Municipal	0	0	5	8.33	3	5	52	86.67	60

Los datos indican que en casos de desaparición la Marina, las policías estatales y las municipales ejercen medidas más drásticas que terminan en la muerte o sin más noticias sobre el paradero de las víctimas, lo cual es indicativo de grandes problemas con la actuación de estas autoridades en contacto con la población y con el uso de la fuerza sin algún tipo de límite o supervisión. Por su parte, el Ejército y las policías federales tendrían un registro que podría considerarse menos rotundo, con altos porcentajes de localización, lo cual es indicativo del uso de la desaparición transitoria como método de obtención de información o bien fabricación de pruebas en estas instituciones para justificar sus labores de seguridad.

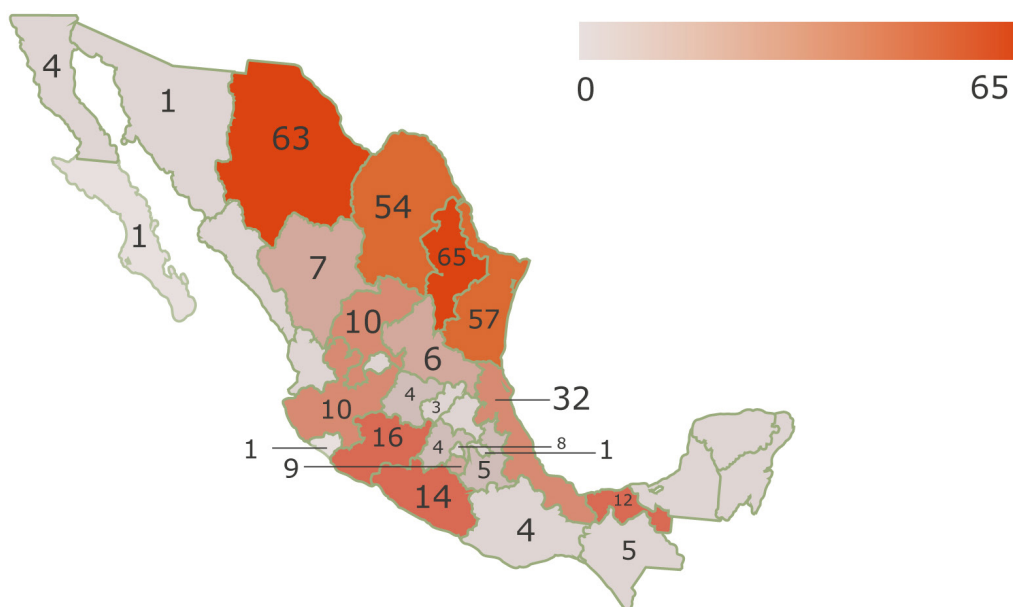
Respecto a procesos contra las víctimas, cabe destacar que de las personas victimizadas por el Ejército, el 50% fueron imputadas de algún delito, mientras solo el 18.6% de las víctimas de la SEMAR tuvieron tal patrón. Ninguna de las víctimas de las corporaciones municipales fueron imputadas, 20.5% de las personas victimizadas por las corporaciones estatales tuvieron un proceso legal, y 72.5% de las víctimas de corporaciones federales fueron acusadas formalmente, lo cual se correlaciona con la cantidad de personas que fueron localizadas con vida, mientras en el otro extremo hay víctimas fatales o de desaparición continuada, quienes no están bajo el amparo de la ley, perpetuando la impunidad así como el sufrimiento de las familias y las comunidades.



De acuerdo con la información sistematizada por la CMDPDH, las recomendaciones de CNDH que contienen hechos de desaparición ocurrieron en 24 entidades del país⁴⁷, cuya distribución se muestra en el siguiente mapa. Nuevo León es la entidad que acumula más víctimas con 65, seguido de Chihuahua con 63, Tamaulipas con 57, Coahuila con 54 y Veracruz con 32. Puede observarse en el mapa que la problemática es más intensa en las entidades fronterizas del norte del país.

Mapa. Distribución de las víctimas de desaparición por entidad de ocurrencia en recomendaciones de CNDH de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc

(Elaboración propia CMDPDH)



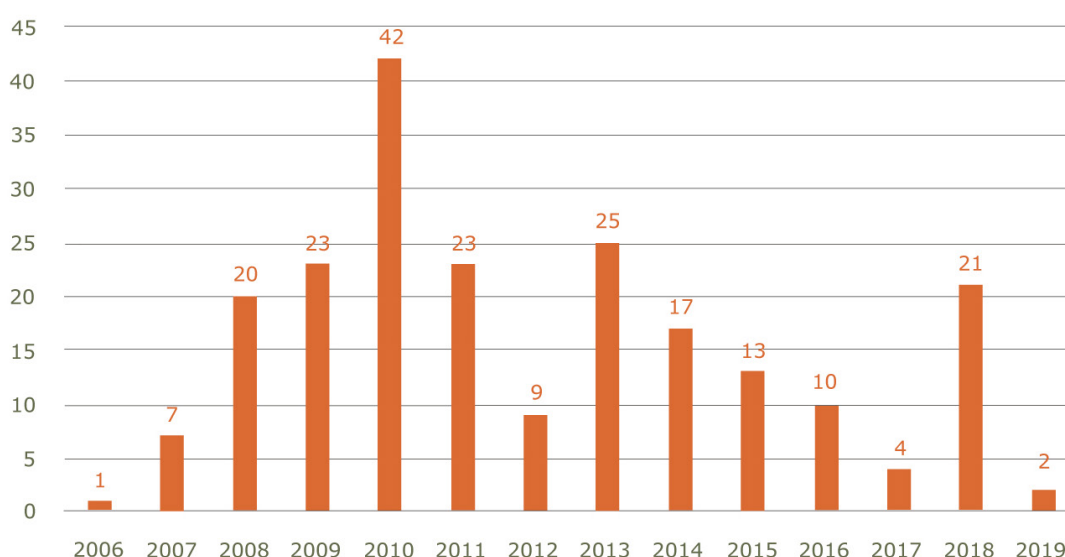
Finalmente, los hechos denunciados en las recomendaciones de CNDH por desaparición se distribuyen en el tiempo de acuerdo a lo mostrado en la gráfica a continuación. Cabe tomar en cuenta que las investigaciones para la realización de las recomendaciones suelen tomar varios meses y en algunos casos varios años,

⁴⁷Las entidades donde no se reportan víctimas son: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

además de que las quejas también pueden presentarse tiempo después de los eventos que se reportan, por lo que hechos referentes a los años más recientes probablemente se verán reflejados en recomendaciones posteriores.

Gráfica. Cantidad de recomendaciones de CNDH que narran hechos de desaparición, de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc

(Elaboración propia CMDPDH)



Aunado a la desaparición de personas, el hallazgo de fosas irregulares es una de las mecánicas que se ha presentado y estudiado en la última década en el país. Sobre este aspecto, la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Clandestinas hace que la información sea de difícil acceso para la ciudadanía. Las fiscalías cuentan con información fragmentada o incompleta en la materia y algunas no cuentan con registro. Un ejercicio colectivo entre organizaciones de la sociedad civil y academia ha logrado contabilizar, a través de solicitudes de acceso a la información y reportes de prensa, al menos 408 fosas clandestinas que

contendrían 1,569 cuerpos exhumados entre 2006 y 2015, según lo reportado por la Fiscalía General de la República. Unas 2,353 fosas con 2,603 cuerpos, halladas entre 2006 y 2019, de acuerdo con 21 fiscalías estatales y entre 1,491 y 1,759 fosas con al menos 4,179 cuerpos según reportes de prensa⁴⁸.

Como consecuencia de la falta de información señalada, los datos oficiales quedan restringidos a aquellos que proporciona la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) en sus reportes a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el último informe oficial⁴⁹ cuenta con datos hasta junio de 2021, sin embargo las cifras oficiales más actuales que fue posible rastrear se encuentran en el *Informe para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas*⁵⁰. Ahí se indica que entre 2006 y noviembre de 2021 se tiene registro de 4,839 fosas y el hallazgo en ellas de 8,278 cuerpos que han sido exhumados; casi la mitad de las fosas localizadas (2,399) se ubican en 5 entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, mientras que poco más de la mitad de los cuerpos exhumados se encuentran relacionados con cuatro entidades (Jalisco, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua) y con la FGR, quien no indicó, de acuerdo con la publicación, la entidad de localización de sus hallazgos.

La desaparición de personas constituye una crisis sumamente grave para la situación de derechos humanos en el país, pues se caracteriza por la ausencia de información precisa y sitúa a las víctimas en escenarios de alta vulnerabilidad para diversos tipos de violencias y abusos. Si bien ha sido un fenómeno complicado de registrar, la exigencia y presión de las familias ha derivado en más y mejores datos que revelan un aumento importante de la incidencia de desapariciones en los últimos años, además de que esta incidencia se concentra de manera importante en las entidades del norte del país. Esto incluso a sabiendas de que existen altos niveles de subregistro por la desconfianza de la sociedad en las autoridades.

La información oficial disponible indica que existen altos niveles de impunidad de esta práctica, y que en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada ha sido usada por las instituciones policiales y especialmente por las FFAA para fabricar culpables o sustraerse de las consecuencias de sus actos, ya que no son instituciones eficientes en las tareas que se les encomendaron hace más de 15 años. De esta forma, la desaparición de personas resulta funcional a un sistema de justicia estructuralmente deficiente y a una estrategia de seguridad que no entrega resultados.

⁴⁸Estos datos y la metodología se encuentran en Plataforma Ciudadana de Fosas. Disponible en: <https://plataformaciudadanade-fosas.org/> (último acceso 11 de octubre de 2022).

⁴⁹Disponible en: <https://www.gob.mx/cnb>, consultado en agosto de 2022.

⁵⁰Secretaría de Gobernación. Informe para el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Disponible en: <https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/CNB-Informe-CED-Espanol.pdf>. (último acceso 11 de octubre de 2022).

2.3. Asesinato, el más costoso de los fracasos

Proteger y preservar la vida de las personas es uno de los objetivos principales y más importantes de cualquier Estado, ya que el derecho a la vida da sentido al resto de las demandas de las personas, lo que justifica el funcionamiento del Estado y por ende, las funciones de las autoridades y de la configuración social como un todo. Así, privar de la vida a una persona de manera arbitraria constituye un crimen internacional y una grave violación a los derechos humanos, al tiempo que refleja un importante fallo por parte de las autoridades al no poder preservar las condiciones de seguridad para el desarrollo completo y digno de las personas.

Los asesinatos son uno de los indicadores más usados a nivel internacional para medir el grado de violencia de las sociedades; esto es así porque las autoridades tienen la responsabilidad de registrar, investigar y esclarecer todos los hechos de esta naturaleza. De esta forma, es uno de los fenómenos con menor porcentaje de subregistro; sin embargo, en México durante las últimas décadas el fenómeno de la desaparición continuada de personas (los casos en que no se conoce el paradero de una persona desaparecida a pesar del paso del tiempo) ha dado lugar a un margen de duda respecto de la intensidad real del fenómeno de los asesinatos.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)⁵¹, en 2015 se perpetraron poco más de 16,000 homicidios dolosos en el país, con tendencia a la alza que derivó en el registro de más de 29,000 homicidios dolosos en 2019; a partir de ese año los asesinatos presentan una ligera tendencia a la baja, con 28,267 homicidios dolosos registrados en 2021. Durante esos siete años se contabilizaron 176,978 asesinatos en el país; las mujeres representan alrededor del 14% de las víctimas, mientras los hombres el 83%⁵². La mayor parte de estos homicidios se cometen con arma de fuego: de 2015 a 2021 dos de cada tres homicidios se cometieron en esta modalidad (118,766), y en 2020 representaron 70% de los homicidios dolosos, el porcentaje más alto registrado.

Además de fallar en proteger la vida de las personas, las autoridades son, en ocasiones, los responsables directos de los asesinatos cometidos en el país. Sin embargo, la información respecto a esta cuestión no es clara debido a diversas fallas

⁵¹<https://www.gob.mx/sesnsnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published>, actualizados al 20 de abril de 2022. Previo a 2015 no se tiene registro desagregado de las víctimas de homicidio en esta fuente, sólo de las carpetas de investigación abiertas.

⁵²Poco más del 3% de las víctimas de homicidio doloso en el SESNSP se refieren como de sexo indeterminado.

en el registro de los datos en las fiscalías. Por ejemplo, la FGR entregó información inconsistente respecto al delito de homicidio doloso cometido por persona servidora pública. En una primera respuesta⁵³ indicó que entre enero de 2006 y noviembre de 2021 se abrieron 50 averiguaciones previas o carpetas de investigación por este delito, de las cuales al momento de la respuesta solo 16 se encontraban judicializadas o consignadas, y una sola había derivado en sentencia.

La FGR reconoció en una segunda respuesta⁵⁴ solo 45 expedientes entre averiguaciones previas y carpetas de investigación en el mismo periodo, dentro de las cuales hay información de 85 víctimas (del periodo 2012 a 2021): 5 mujeres, 69 hombres y 11 personas cuyo sexo no fue identificado; en esta respuesta no se indican autoridades responsables. Casi una tercera parte de estas víctimas (28) se registraron en los últimos tres años.

Respecto a las autoridades responsables, la FGR enlista en la primera solicitud: "SEDENA", "militar", "Policía Federal", "SEMAR", "agente del Ministerio Público Federal (MPF) mando medio superior", "Gendarmería", "Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)", "médico", "Hospital militar" y "Policía Federal Ministerial (PFM)", sin brindar más datos específicos de cuándo y en cuántas averiguaciones fueron señaladas tales autoridades. Sin embargo, en respuesta a solicitud expresa respecto a carpetas o averiguaciones previas que involucren a personal de SEMAR⁵⁵, la FGR indicó no contar con registros, lo cual se contradice con el listado de autoridades responsables de la primera respuesta.

A nivel estatal, las fiscalías o procuradurías de 8 entidades no entregaron información respecto a los expedientes por homicidio doloso cometido por personas servidoras públicas⁵⁶, ya sea que no respondieron a la solicitud o indicaron que no tenían una sistematización que permitiera entregar la información solicitada. Otras 9 entidades entregaron información parcial⁵⁷ porque iniciaron la sistematización de la información posterior a 2006. En total las instituciones reportaron 752 expedientes por este delito entre enero de 2006 y noviembre de 2021⁵⁸. De esta cantidad, sólo 172 expedientes fueron reportados como consignados o judicializados, es decir el 22.9%.

⁵³Respuesta a solicitud de información 330024621000890.

⁵⁴Respuesta a solicitud de información 330024621000879.

⁵⁵Respuesta a solicitud de información 330024621000881.

⁵⁶Las fiscalías o procuradurías que no entregaron información o no respondieron a lo solicitado son: Baja California (solicitud de información 021381021000172), Ciudad de México (092453821000703), Guerrero (120203121000107), Morelos (172237721000123), Nayarit (180369321000085), Querétaro (221277421000104), San Luis Potosí (240469821000124) y Veracruz (301146700012821). Las que sí brindaron información son: Aguascalientes (010054821000114), Baja California Sur (030075422000081), Campeche (040081000009821), Chiapas (070136721000114), Chihuahua (080139721000218), Coahuila (050096900014921), Colima (061903921000097), Durango (101126500010321), Guanajuato (112093900034521), Hidalgo (130213100042221), Jalisco (140255821000640), Michoacán (162155721000105), Nuevo León (191841721000153), Estado de México (423986), Oaxaca (201172621000101), Puebla (210421521000246), Quintana Roo (231286200011421), Sinaloa (250483000011321), Tabasco (270511400011021), Tamaulipas (281197021000123), Tlaxcala (291213221000095), Sonora (261156221000187), Yucatán (310568621000114) y Zacatecas (321103821000094).

⁵⁷Las instituciones que sistematizan su información posterior a 2006 son: Campeche (2010), Chiapas (2012), Chihuahua (2014), Coahuila (2015), Colima (2010), Durango (2010), Guanajuato (2015), Hidalgo (2016) y Estado de México (2017).

⁵⁸Las respuestas de Baja California Sur y Sonora abarcan el periodo de enero de 2006 a diciembre de 2021.

Con respecto a las víctimas contenidas en tales expedientes, las fiscalías o procuradurías estatales indicaron a 1,052 personas, aunque en general no sistematizan información sociodemográfica de las mismas; se identifican a 84 mujeres: 42 adultas y 15 niñas o adolescentes, así como 907 hombres: 596 adultos y 44 niños o adolescentes; 1 hombre indígena, 1 hombre extranjero y 1 hombre migrante. De acuerdo con los datos proporcionados, 2010 a 2012 son los años en que se acumularon más investigaciones y víctimas por el delito de homicidio doloso cometido por persona servidora pública, único periodo con más de 75 expedientes y más de 100 víctimas anuales.

Respecto de personas fallecidas en hechos donde estuvieron involucradas las FFAA (dimensión material de la militarización), la SEDENA informó⁵⁹ que de enero de 2006 a noviembre de 2021 se registraron 5,223 agresiones a personal militar, donde se registraron 5,196 “agresores” así como 43 “víctimas” y 301 militares fallecidos. Por su parte, SEMAR entregó información⁶⁰ a partir de 2008 donde contabiliza 402 enfrentamientos con 528 “presuntos infractores en flagrancia de delitos” que resultaron fallecidos y 69 miembros de personal naval también perdieron la vida. Finalmente, de julio de 2019 a noviembre de 2021 las Direcciones Generales que integran la Unidad de Órganos Especializados por Competencia así como la Dirección General de Servicios Especiales de la Guardia Nacional indican que en 142 enfrentamientos han fallecido 2 civiles y 27 elementos de la institución, mientras las Coordinaciones Estatales de la institución contabilizan 255 enfrentamientos con 101 “agresores”, 6 civiles y 15 elementos de las FFAA fallecidos⁶¹. Así, se tendría un registro de 5,876 civiles asesinados en enfrentamientos con las FFAA (incluyendo la Guardia Nacional que de facto ha sido militar).

De acuerdo con la información recabada de las fiscalías o procuradurías del país y de las FFAA, en los últimos 16 años habría al menos 7,000 víctimas de asesinato cometidos por personas funcionarias públicas (civiles y castrenses), distribuidas en el tiempo como se muestra en la gráfica siguiente.

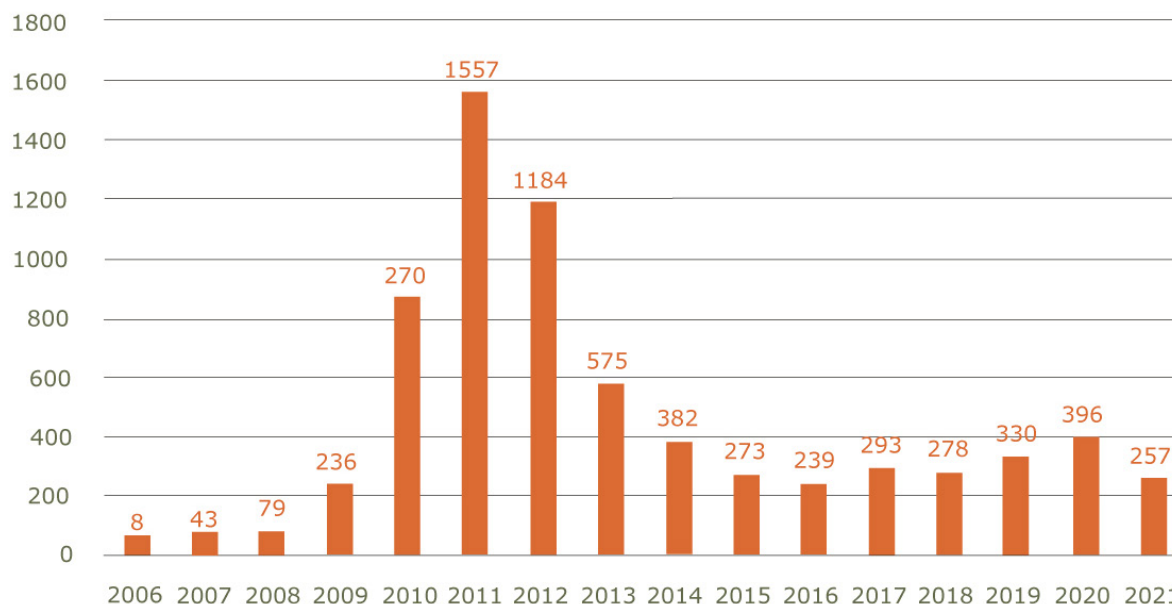
⁵⁹Respuesta a solicitud de información 330026421000836.

⁶⁰Respuesta a solicitud de información 330026621000513.

⁶¹Respuesta a solicitud de información 332259821000504.

Gráfica. Acumulado de víctimas de asesinato por personas funcionarias públicas (civiles y castrenses) de acuerdo con fiscalías, procuradurías, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional

(Elaboración propia CMDPDH)



Adicionalmente se solicitó a las fiscalías o procuradurías estatales información respecto a la cantidad de personas fallecidas en acciones presuntamente ejecutadas por grupos criminales del 01 de enero del 2006 al 30 de noviembre del 2021. De las 32 entidades, 25 no proveyeron la información⁶², ya sea porque no respondieron a la solicitud, indicaron que no sistematizaban los datos o alegaron incompetencia en el tema. Las instituciones que sí brindaron información corresponden a los estados de Chihuahua (desde 2016), Coahuila (2012), Hidalgo (2015), Jalisco (2007), Michoacán (2019), Puebla (2006) y Zacatecas (2017)⁶³. En total estas instituciones reportaron 24,107 víctimas de homicidio doloso presuntamente por grupos criminales, entre las cuales habría al menos 6,528 hombres y 730 mujeres; al menos 13,884 serían personas adultas y 426 niños, niñas y adolescentes; también se ubican al menos 22 personas extranjeras y 2 personas con discapacidad, aunque pocas son las instituciones que entregaron sus datos con suficiente desagregación en variables demográficas.

⁶²Solicitudes de información: Aguascalientes (010054821000117), Baja California (021381021000176), Baja California Sur (030075421000093), Campeche (040081000010121), Chiapas (070136721000117), Colima (061903921000100), Ciudad de México (092453821000707), Durango (1011265000107219), Guanajuato (1120939000350219), Guerrero (120203121000110), Morelos (172237721000126), Nayarit (180369321000088), Nuevo León (191841721000156), México (424006), Oaxaca (201172621000104), Querétaro (221277421000107), Quintana Roo (231286200011721), San Luis Potosí (240469821000127), Sinaloa (250483000011621), Tabasco (270511400011321), Tamaulipas (281197021000126), Tlaxcala (291213221000098), Sonora (261156221000190), Veracruz (301146700013121) y Yucatán (310568621000117).

⁶³Solicitudes de información: Chihuahua (080139721000221), Coahuila (050096900015221), Hidalgo (130213100042521), Jalisco (140255821000647), Michoacán (162155721000108), Puebla (210421521000249) y Zacatecas (321103821000097).

Respecto al asesinato como violación de derechos humanos, la CNDH señaló⁶⁴ que de enero de 2006 a noviembre de 2021 ha recibido 26 quejas por ejecución sumaria, arbitraria y extrajudicial, en las cuales se señala como presuntos responsables a: SEDENA (15 quejas), PGR/FGR (6), SEMAR (4), Policía Federal Preventiva (PFP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (3), Segob (3), Policía Federal de la Segob (2) y CNS (1), tomando en consideración que una misma queja puede involucrar a varias autoridades. La CNDH no cuenta con un registro sistematizado respecto a las víctimas en tales quejas. Adicionalmente, refirió⁶⁵ que entre 2006 y 2021 publicó 11 recomendaciones por el “Hecho Violatorio ‘Ejecución sumaria o extrajudicial’”, de las cuales 7 se calificaron como violaciones graves a los derechos humanos; también tiene registro⁶⁶ de 141 recomendaciones por “Violación al derecho a la vida” o “Privación de la vida”, siendo 20 consideradas violaciones graves.

Los organismos estatales de derechos humanos informaron⁶⁷ de 608 quejas por ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2021⁶⁸. Destaca que entre 2006 y 2014 hay un promedio menor a 20 quejas anuales, mientras que de 2015 a 2021 se presentan más de 40, llegando en 2019 a 107 quejas registradas. Si se añaden las quejas registradas por CNDH, el total de expedientes en los organismos de derechos humanos del país se distribuyen de acuerdo con lo mostrado en la gráfica a continuación.

⁶⁴Respuesta a solicitud de información 330030921000351.

⁶⁵Respuesta a solicitud de información 330030922000868.

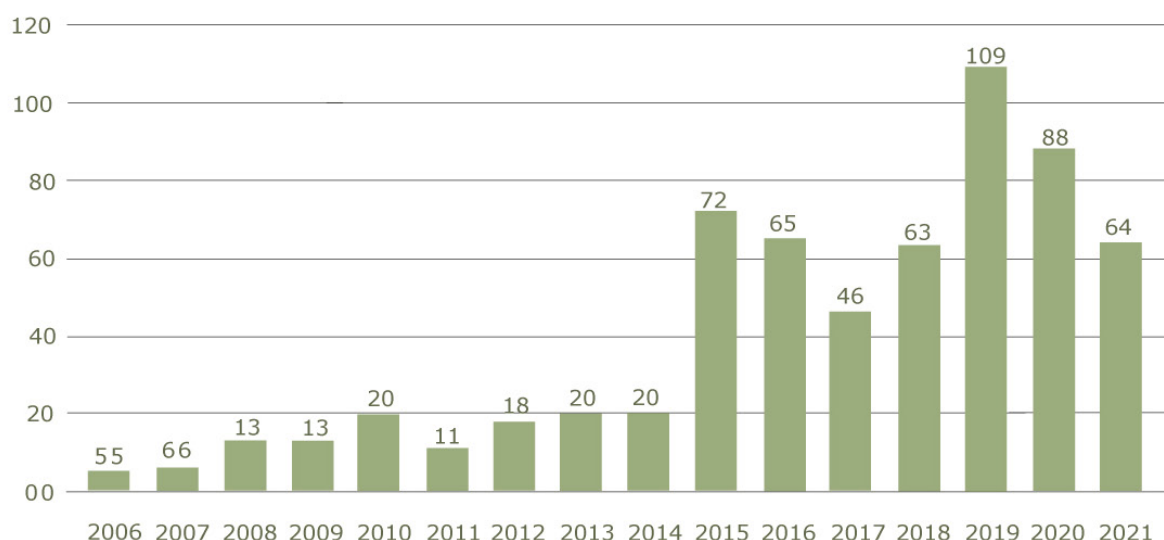
⁶⁶Respuesta a solicitud de información 330030922000869.

⁶⁷El único organismo estatal de derechos humanos que no entregó información fue el de Baja California Sur (solicitud de información 030078521000055), quien respondió que la información tendría que revisarse directamente en sus informes anuales. Las respuestas corresponden a las siguientes solicitudes de información: Aguascalientes (010054721000053), Baja California (020067821000050), Campeche (040091400005221), Chiapas (070136421000050), Chihuahua (080159121000079), Coahuila (050309600004721), Colima (0601146210000399), Ciudad de México (090165821000154), Durango (100184300005121), Guanajuato (110200000008621), Guerrero (120310621000041), Hidalgo (130226900005621), Jalisco (140293221000131), Michoacán (160352821000043), Morelos (170362621000040), Nayarit (180377521000041), Nuevo León (191118621000080), México (423987), Oaxaca (201172521000045), Puebla (210448321000065), Querétaro (220459121000046), Quintana Roo (231287300005221), San Luis Potosí (240477221000087), Sinaloa (250486100004021), Tabasco (270511300005821), Tamaulipas (280527421000036), Tlaxcala (291208821000048), Sonora (260502221000071), Veracruz (300563700005121), Yucatán (310586621000038) y Zacatecas (321103721000040).

⁶⁸Los organismos locales que tienen información sistematizada posterior a 2006 son: Baja California (2015), Chihuahua (2014), Quintana Roo (2009), San Luis Potosí (2009), Sinaloa (2008) y Veracruz (2012).

Gráfica. Acumulado de quejas a organismos de derechos humanos por ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial

(Elaboración propia CMDPDH)



En los registros de los organismos de derechos humanos locales, en 272 ocasiones se señala a elementos de la fiscalía o procuraduría estatal como presuntas personas responsables, en 228 quejas a elementos de las policías estatales, y 216 involucra a elementos de las policías municipales; también se señala a personal de ayuntamientos, presidencias municipales y personas servidoras públicas de instituciones federales dentro de estas quejas, entre otras instituciones (una sola queja puede involucrar a más de una autoridad).

Respecto de las víctimas⁶⁹ se ubican 689 personas (además se informa de 15 víctimas colectivas) en el periodo analizado, 521 hombres: al menos 387 adultos y 33 niños o adolescentes, 13 indígenas, 10 extranjeros y 4 personas con discapacidad; así como 144 mujeres: al menos 95 adultas, 17 niñas o adolescentes y 4 extranjeras. Casi el 40% de las víctimas (272) corresponden a quejas en los últimos tres años.

⁶⁹Los organismos de Campeche, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa no entregaron información respecto a víctimas.

De acuerdo con los casos documentados por la CMDPDH, que discrepan con los proporcionados por la CNDH, se han publicado 109 recomendaciones que refieren el asesinato de alguna o varias personas. Se contabilizan a 453 víctimas, que incluyen a 207 hombres, 52 mujeres, 10 personas de quienes se desconoce su sexo y 184 víctimas colectivas (en 23 hechos). Respecto de las víctimas también se sabe que al menos 99 son mexicanas, 36 hondureñas, 15 salvadoreñas, 15 guatemaltecas, 6 ecuatorianas, 3 estadounidenses, 2 brasileñas y 2 nicaragüenses.

Hay 317 víctimas que fueron asesinadas con un arma de fuego y al menos 83 personas que fueron golpeadas antes de perder la vida. Respecto de las victimizaciones añadidas al asesinato, destaca que en 124 ocasiones las víctimas fueron privadas de su libertad por un particular, y 83 personas estuvieron en una confrontación u operación de algún grupo del crimen organizado antes de ser asesinadas; así, puede verse que los grupos criminales juegan un papel relevante, en ocasiones en colusión con las autoridades, que culminan en el asesinato de las víctimas.

Se señala que en 97 casos las personas también fueron desaparecidas previo a su localización sin vida. En 56 ocasiones el asesinato fue precedido por una detención arbitraria y en 70 casos hubo fabricación de pruebas o transformación de la escena del crimen por parte de las autoridades, además de que 38 personas fueron víctimas de tortura antes de su asesinato. De acuerdo con estos datos, el asesinato podría considerarse como el último eslabón de una cadena de crímenes cometidos en contra de la persona, en donde las autoridades buscan armar y controlar una narrativa de los hechos y terminan por sustraer a la víctima por completo del amparo de la ley, y a ellos mismos de las posibles consecuencias de sus actos.

La razón que más se repite para justificar el asesinato de una persona, de acuerdo al contenido de las recomendaciones, es que se relaciona con actividades del crimen organizado: 102 personas se consideran víctimas colaterales de actos criminales, mientras que a 74 personas se les acusa de haber cometido un crimen o ser partícipe de crimen organizado; sin embargo, solo una de estas víctimas tenía un proceso penal, lo que indica que, previo a la victimización de estas personas, las autoridades no tenían elementos para acusarles de algún delito.

Las autoridades alegan que se defendieron de una agresión para justificar el asesinato de 140 víctimas, 57 de las cuales también fueron acusadas informalmente (sin proceso) de participar en algún crimen y 90 murieron directamente durante el enfrentamiento. Esta es la segunda razón más común respecto a los factores que desencadenaron el asesinato de personas.

Enseguida, 88 víctimas fueron asesinadas en el marco de un patrullaje, 60 de las cuales murieron directamente en ese hecho. En otros 67 casos las víctimas se encontraron con las autoridades en cumplimiento de operativos conjuntos, operaciones dirigidas u operaciones de erradicación de enervantes, ya sea en enfrentamientos o como “bajas colaterales”. En tales hechos, 48 personas murieron, mientras que 13 fueron detenidas de manera ilegal y sufrieron otras victimizaciones por parte de las autoridades, incluyendo violación o agresión sexual, tortura y tratos inhumanos y degradantes.

De las 453 víctimas de asesinato contenidas en las recomendaciones, solo a 17 se les imputaron cargos formales por algún delito; en total hay 9 personas acusadas de delitos relacionados a armas o cartuchos, 7 acusadas de robo de vehículo, 3 por delitos contra la salud (entre estas tres acusaciones hay solapamientos, que involucran a 16 personas en total) y 1 persona acusada de asesinato y secuestro.

Respecto de las personas perpetradoras, 173 personas fueron victimizadas por grupos del crimen organizado. En 72 ocasiones estas personas también fueron víctimas de secuestro, mientras que 54 personas estuvieron desaparecidas de manera transitoria.

Las FFAA son responsables de hechos de asesinato en 147 ocasiones. El Ejército participó del asesinato de 111 personas, de las cuales 41 murieron en supuestos enfrentamientos, operativos o como “daño colateral”; 24 personas sufrieron victimizaciones añadidas por elementos castrenses, tales como violación o agresión sexual, tortura, tratos inhumanos y degradantes o detención arbitraria, y 13 personas sufrieron desapariciones con la intención de ocultar la verdad y evadir responsabilidades por su asesinato. La SEMAR participó en 39 ejecuciones, 14 de las cuales ocurrieron en supuestos enfrentamientos, operativos especiales o como “daño colateral” de las acciones de los marinos; 20 personas estuvieron desaparecidas transitoriamente antes de localizar sus cuerpos, y 17 personas sufrieron de violación o agresión sexual, tortura, tratos inhumanos y degradantes o detenciones ilegales por parte de las autoridades.

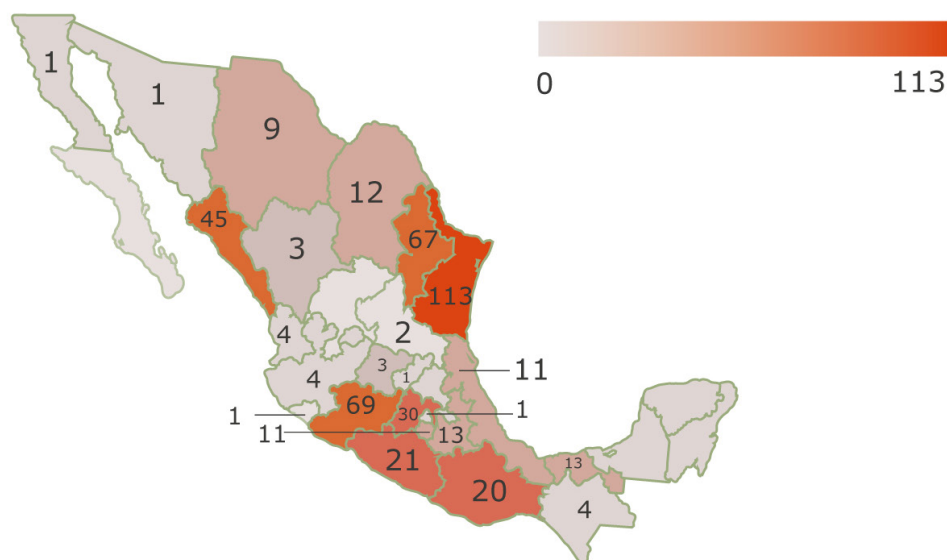
Las corporaciones policiales federales están involucradas en la victimización de 84 personas que resultaron asesinadas, 63 de las cuales murieron en su contacto con los agentes de seguridad en supuestos enfrentamientos o en operativos especiales. Se reportó que en 4 ocasiones las personas victimizadas por policías federales fueron víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes, violación o agresión sexual y detenciones arbitrarias, y una persona con desaparición transitoria previo a su asesinato.

Las policías estatales son responsables de victimizar a 31 personas asesinadas, 11 de ellas murieron supuestos en enfrentamientos o dentro de operativos especiales; otras 11 personas sufrieron una desaparición transitoria e igualmente tuvieron victimizaciones añadidas que incluyen tortura, tratos inhumanos y degradantes o detención arbitraria. Por su parte, las policías municipales fueron señaladas como perpetradoras en 9 ocasiones en que las víctimas fueron asesinadas, 7 de las cuales primero fueron detenidas de manera arbitraria y 2 murieron en un operativo especial; 5 personas fueron víctimas de violación o agresión sexual, tortura o trato inhumano y degradante y dos personas sufrieron una desaparición transitoria.

De acuerdo con esta documentación los asesinatos tuvieron lugar en al menos 23 entidades de la República⁷⁰ y se distribuyen de acuerdo a lo mostrado en el mapa a continuación. Tamaulipas es el lugar que reporta más víctimas, con 113, seguida de Michoacán (69), Nuevo León (67) y Sinaloa (45).

Mapa. Distribución de las víctimas de asesinato por entidad de ocurrencia en recomendaciones de CNDH de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc

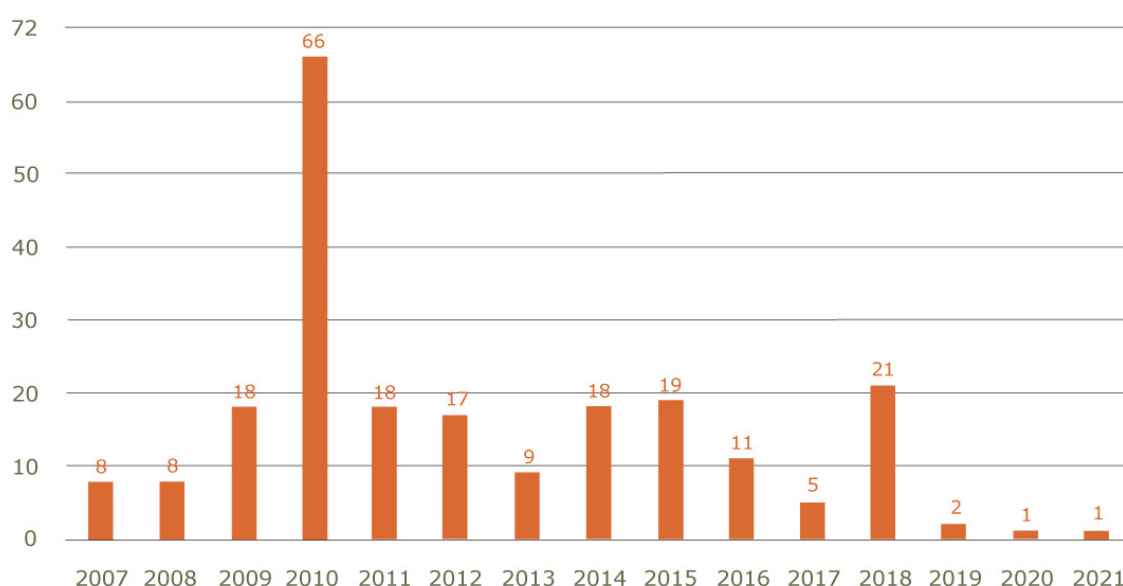
(Elaboración propia CMDPDH)



⁶⁹No se registraron victimizaciones de personas asesinadas en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Finalmente, los hechos denunciados en las recomendaciones de CNDH por ejecución se distribuyen en el tiempo de acuerdo a lo mostrado en la gráfica que se presenta a continuación. Cabe tomar en cuenta que las investigaciones para la realización de las recomendaciones suele tomar varios meses y en algunos casos varios años, además de que las quejas también pueden presentarse tiempo después de los eventos que se reportan, por lo que hechos referentes a los años más recientes probablemente se verán reflejados en recomendaciones posteriores.

Gráfica. Cantidad de recomendaciones de CNDH que narran hechos de asesinato, de acuerdo a datos sistematizados en la plataforma I-Doc
(Elaboración propia CMDPDH)



En el recuento de asesinatos de este capítulo, son notorias las malas prácticas de las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. Además, los patrones de conducta que derivan en crímenes internacionales son sistemáticos y han persistido en el tiempo independientemente del partido en el poder, o del cambio de autoridades responsables y la creación de nuevas corporaciones.

Los crímenes están ligados de manera muy importante a los despliegues y operativos llevados a cabo por las FFAA, quienes para demostrar efectividad o resultados en sus labores, recurren sistemáticamente a la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, asesinato y fabricación de culpables, como se ha documentado y expuesto en este capítulo. Ninguno de los datos que se exponen indican que estas prácticas estén disminuyendo sino todo lo contrario: con el paso del tiempo y con la impunidad imperante estos crímenes se extienden en el territorio y en el tiempo. Dando cuenta de la dimensión material de la militarización con un alto poder de fuego e índice de letalidad, así como de la dimensión operativa al demostrar patrones recurrentes de actuación y una clara organización para perpetrar crímenes atroces.





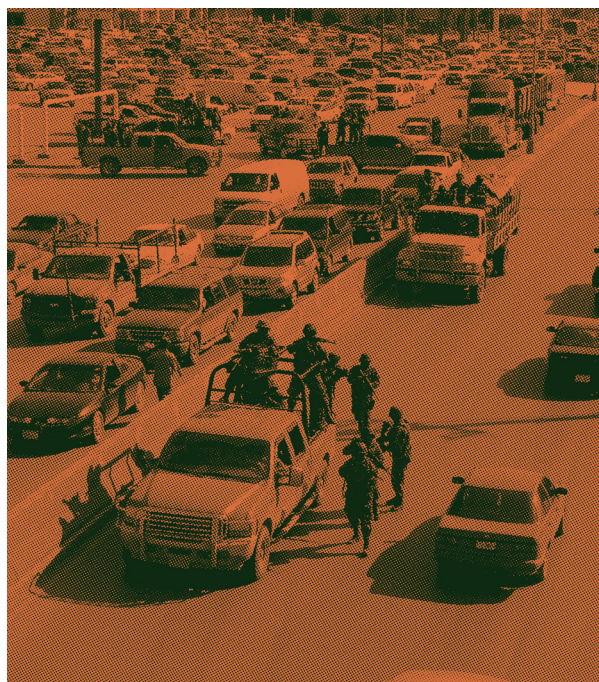
Capítulo 3

La guerra interiorizada: Todos los militares a las calles

La guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad los innumerables duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como dos luchadores, (Estado contra Narcotráfico, en el caso de México) cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física; su propósito siguiente es abatir al adversario e incapacitarlo para que no pueda proseguir con su resistencia. (Clausewitz, 1832).

El haber generado la necesidad de militarización viene de la interiorización de la idea de una guerra, en la que se identificó como enemigo a los grupos del crimen organizado y se estableció como objetivo el abatirlos y detener su proliferación, propuesta que a más de 15 años no ha cumplido con sus metas. Por el contrario, ha tenido consecuencias atroces como lo hemos expuesto. Estos resultados de la estrategia, descritos en el capítulo anterior demuestran que las fuerzas de seguridad policiales y en mayor medida militares se han visto involucradas en distintos hechos que revelan una política que ordenó, permitió, promovió y facilitó la comisión de crímenes internacionales, ocasionando que su perpetración se volviera más frecuente.

Con la entrada del entonces presidente FCH y la estrategia de seguridad que implementó su administración, continuada por EPN y que se ha consolidado con AMLO, se ha promovido y ordenado el ataque frontal militarizado con el supuesto objetivo de desarticular a las organizaciones criminales y contrarrestar su operación. Esto ha otorgado una vía de justificación para que los mandos responsables de crímenes internacionales puedan valerse de cualquier medio o actividad para lograr supuestos resultados.



En este proceso la cantidad de elementos militares en las calles fue creciendo mes con mes, y se volvió parte de la cotidianidad de la vida mexicana, cada vez era más común ver convoys de policías locales y federales acompañados y comandados por fuerzas castrenses. A 15 años de su ejercicio parecería normal ver elementos con subfusiles y otras armas de alto poder alrededor de las plazas públicas, bajo la abominable idea de que la paz se procura mediante materiales de guerra.

Al mismo tiempo que la cantidad de elementos desplegados adscritos a las FFAA aumentaba, la cantidad de detenciones arbitrarias, asesinatos,

torturas y desapariciones forzadas crecían⁷¹. A pesar de ello y de las múltiples denuncias hechas por colectivos de víctimas, sociedad civil, academia y recomendaciones de organismos internacionales⁷², el actual gobierno decidió crear un nuevo cuerpo de seguridad federal, la GN, presentado como una institución civil, a pesar de que su composición es en su mayoría castrense; igualmente, su mando operacional así como su adiestramiento es de corte militar.

Mediante la creación y el despliegue de la GN el gobierno actual insiste en que la militarización es la respuesta del Estado ante la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, además de ser inefectiva, esta política es también causa estructural del incremento de la violencia armada, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes internacionales.

La reforma constitucional que creó a este cuerpo, aprobada en marzo de 2019, mediante un artículo transitorio, facultó al presidente de la República para disponer de las FFAA en tareas de seguridad pública; y únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En uso de ese artículo, en mayo de 2020, el presidente emitió el llamado “Acuerdo Militarista”⁷³, cuyo contenido no garantiza los requisitos establecidos en la Constitución e ignora las obligaciones internacionales de México.

⁷¹ Ver capítulo 2.

⁷² 17 recomendaciones en total en el periodo que abarca la presente investigación, ver: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/09/20220920-_Recomendaciones-de-organismos-int-fuerzas-armadas.pdf.

⁷³ DOF. 11 de mayo de 2020. ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0 (último acceso 11 de octubre de 2022).

De forma adicional, en septiembre de 2022, contrario al texto constitucional, se aprobaron una serie de reformas legales, a fin de que la SEDENA ejerza control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Resulta alarmante que a pesar de lo mencionado en los capítulos anteriores, el contenido de la reforma perpetúa la estrategia de seguridad que ha demostrado su ineficacia durante casi 16 años de violencia.

De manera particular las reformas atentan contra el artículo 21 constitucional que establece que “[l]as instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”⁷⁴. Igualmente, atenta contra otras disposiciones constitucionales, principios de seguridad jurídica y separación de poderes, ya que otorga a los militares facultades de investigación, inteligencia, adiestramiento y capacitación. De la misma forma sujeta al personal militar adscrito a la GN al fuero militar en caso de cometer infracciones castrenses⁷⁵.

La actual política de seguridad ha sido un proceso que ha involucrado de forma exponencial la participación de cuerpos militares, modificando de manera transexenal y a conveniencia reglamentos, códigos e incluso la Constitución, asegurando (y blindando) el control operativo de las FFAA sobre la seguridad pública/civil y sobre el control ciudadano. La idea de los militares, como el único cuerpo que puede hacer frente a los grupos del crimen organizado, fue moldeada y (im)posicionada de tal manera que hoy no existe un cuerpo de carácter civil dedicado a la procuración de la seguridad pública federal. Cada vez parece más normal ver militares en las calles o realizando actividades distintas a las de sus funciones esenciales. Cada día se interioriza más la idea de guerra o conflicto, normalizando el despliegue militar, enfatizando el uso de la fuerza (y materiales de guerra) y la amenaza de violencia como los medios más apropiados para la procuración de la seguridad pública, rompiendo totalmente con el paradigma de la seguridad ciudadana.

⁷⁴ DOF. 28 de mayo de 2021. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 21. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>. (último acceso 11 de octubre de 2022).

⁷⁵ Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión el 3 de septiembre de 2022.

■ 3.1. Todos los militares a las calles

Esta guerra, como lo hemos descrito en capítulos anteriores, fue tanto adoptada como impuesta. Se trata entonces de hechos ejecutados en el marco de la política de Estado que propicia y alienta la comisión de crímenes y justifica las conductas como supuestamente legales y legítimas. Cada vez más y más elementos se despliegan bajo la justificación del combate al crimen organizado y la reducción de la violencia, a pesar de la evidencia y de las múltiples observaciones y recomendaciones de organismos internacionales en contra de la militarización, 16 años después estamos en el punto de la historia mexicana en el que se encuentra un mayor número de elementos militares desplegados en territorio nacional realizando tareas de seguridad pública y otras que no les corresponden.

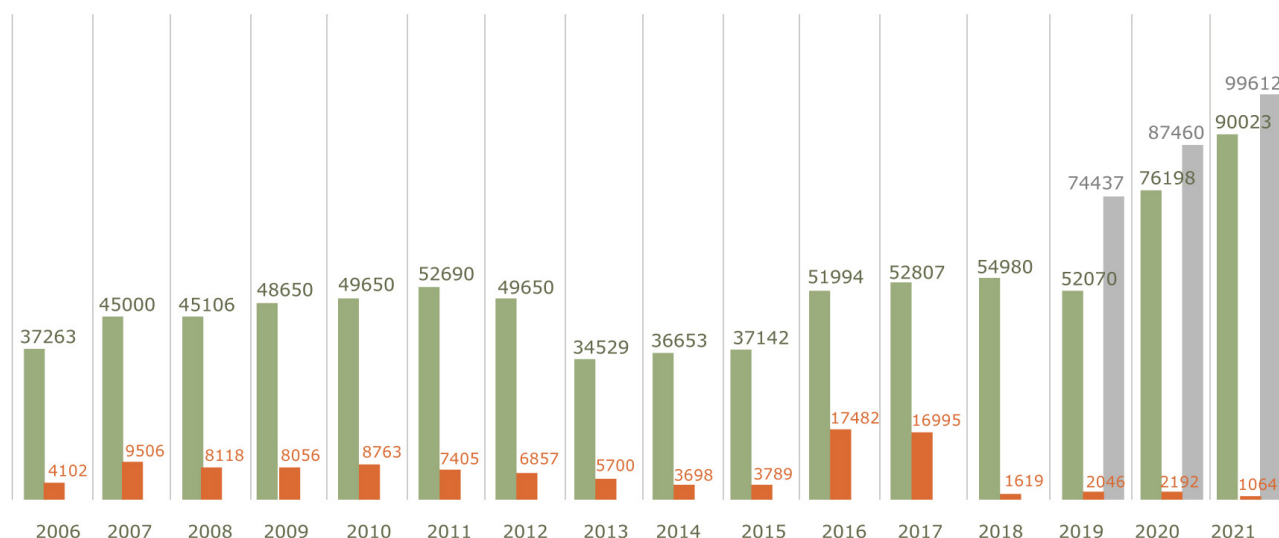
Desde 2006, la SEDENA y la SEMAR también incrementaron sus mecanismos de cooperación, realizando de forma conjunta operaciones de alto nivel e intercambios de instructores en sus planteles militares, especialmente para la concepción, preparación y conducción de las operaciones militares (SEDENA, 2012), por lo que no sorprende que sus técnicas y patrones de actuación se hayan ido asemejando con los años. Aunado a ello, la GN: es conformada por elementos de ambas secretarías. Como si un nuevo nombre y uniforme fuesen a cambiar años de historia y borrar la memoria de las miles de víctimas y sobrevivientes de tortura, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros crímenes.

En los últimos años, la seguridad pública se ha militarizado a un ritmo alarmante, ya sea por el empleo de armas y materiales de guerra con alto poder de fuego o por el despliegue masivo de elementos castrenses. Para finales del sexenio de FCH a 6 años de haber iniciado la “Guerra contra las drogas”, había más de 56,517 elementos de las FFAA desplegados realizando tareas propias de la estrategia de seguridad emprendida desde el ejecutivo. A mitad de la administración de AMLO, al cierre del 2021, había más de 190,699 elementos con adiestramiento militar realizando labores propias de seguridad civil, de los cuales 90,023 se encuentran adscritos a la SEDENA, 1,064 a la SEMAR y 99,612 a la GN.

Gráfica. Cantidad de personal militar desplegado, por año y por institución⁷⁶

(Elaboración propia CMDPDH)

SEDENA SEMAR GN

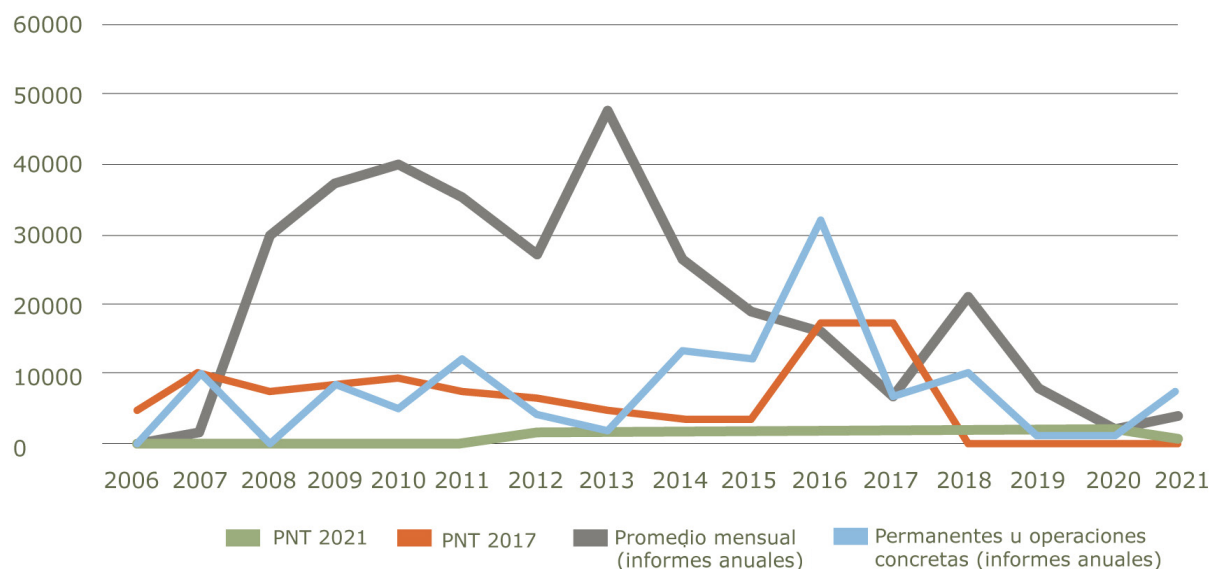


Ante esta cifra de una creciente militarización de la seguridad pública se debe destacar el caso de la información presentada por la SEMAR, institución que muestra discrepancias profundas entre los datos que ofrecieron en respuesta a una solicitud de información presentada en marzo de 2017 y una en 2021, donde ninguno de los años coinciden con el número de elementos desplegados entre 2006-2017. Y a su vez ninguna de estas coincide con la información que la secretaría rindió en sus informes anuales.

⁷⁶ Respuestas a solicitudes de información: SEDENA 330026421000840, SEMAR 330026621000516, 330026622000427 y 0001300019517, GN 332259822000069 y 332259821000507.

Gráfica. Cantidad de elementos desplegados de la SEMAR por año, de acuerdo a diferentes respuestas a solicitudes de información⁷⁷

(Elaboración propia CMDPDH)



“Yo tengo otros datos” se dijo alguna vez en el actual sexenio, ante la confrontación de una reportera con el ejecutivo (Presidencia de la República, 2019). Las discrepancias profundas en la información a la que se puede acceder de forma pública son un elemento más que abona al ejercicio de violencia de sistema, misma que invisibiliza a las víctimas, que impide llevar ante la justicia a los perpetradores de crímenes graves y obstaculiza una adecuada rendición de cuentas de tanto del Estado en general como de los máximos responsables de cometer crímenes internacionales. La manipulación de información o bien la presentación de datos que se contradicen, son un ejercicio que se ve acompañado del manejo mediático y de la constante promoción de la supuesta necesidad de mantener a las FFAA desplegadas en todo el territorio nacional.

Es innegable que las fuerzas de seguridad, principalmente las militares, se han visto involucradas en distintos hechos que revelan una política que permitió, promovió y facilitó la comisión de crímenes atroces. Los perpetradores resultaron pertenecer a las mismas instituciones supuestamente garantes de la seguridad del país. Su forma de actuar, según lo que se puede observar de los hechos de cada caso documentado por la CMDPDH a través de la plataforma I-Doc, demuestra una voluntad de aparentar que los actos se dan en el marco de la legalidad, en cumplimiento de alguna estrategia o por la persecución de un bien mayor a costa de la seguridad y la vida de personas.

⁷⁷ Revisión de informes anuales de la SEMAR 2006-2022 y Respuestas a solicitudes de información SEMAR 330026621000516, 330026622000427 y 0001300019517.

3.2. Estructuras criminales y violencia de sistema

Mucho se habla del despliegue masivo de elementos militares para el cumplimiento de tareas distintas a sus funciones originales. Sin embargo, poco se sabe de la amplitud de ese sistema utilizado para operar una política de seguridad que a pesar de haber mostrado resultados atroces, hoy se traslada a otros ámbitos de la vida pública del país, como el control de aduanas y de fronteras, los controles migratorios, de las unidades de medidas cautelares, de la operación de programas de salud, de obra pública, entre otros.

Es preciso referirnos no solo a la cantidad de personal desplegado sino también a la institucionalidad y generalidad con la que se cumplen las órdenes emanadas del más alto mando, es decir, el presidente de la República. Desde cómo estas son transmitidas a todas las unidades que comprenden la estructura militar, principalmente de SEDENA y SEMAR, y cómo toda esta estructura se ha visto involucrada en la comisión de crímenes graves.

A partir de la documentación de casos realizada por la CMDPDH, se puede identificar la sistematicidad de los crímenes, que siguen un patrón de conducta que sugiere que la comisión de estos hechos fue ordenada o al menos tolerada u ocultada por altos mandos militares y civiles. Dada la evidencia, podemos afirmar que los casos no son aislados o casuales, sino que sugieren un vínculo a las órdenes derivadas de la estrategia de seguridad operada por distintas unidades del Estado. Además de que se observan patrones similares en el actuar de las autoridades, mismos que ya fueron abordados y descritos en el capítulo 2 de este documento.

Para este apartado nos centraremos en cómo se ven esos crímenes perpetrados entre 2006-2021, documentados por la CMDPDH, insertados en la amplitud de la estructura militar, demostrando que a lo largo de estos 16 años de guerra no hay una sola Región Militar que no esté involucrada en crímenes internacionales perpetrados por unidades bajo su mando y jurisdicción. Cobrando relevancia y pertinencia este 2022, en donde se colocó bajo el mando operativo y administrativo de las Regiones Militares de la SEDENA a la Guardia Nacional.

Debido a esto y a la naturaleza de los documentos analizados⁷⁸, las autoridades que se presentan como principales perpetradores de crímenes internacionales son las FFAA. El número de casos analizados y atribuidos al ejército y de las que fue posible identificar de mejor manera a las unidades específicas involucradas,

⁷⁸ Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH del 01 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2021.

representan solo una muestra de los crímenes que comete el ejército en el país, algunas veces incluso actuando en colusión con grupos criminales. La SEDENA es señalada como responsable en al menos 141 casos narrados en 138 recomendaciones, mientras que la SEMAR se le atribuyen 98 casos en 60 recomendaciones⁷⁹.

En su conjunto, ambas fuerzas suman 193 recomendaciones, de las 324 documentadas, es decir que 2 por cada 3 de estas, narran actos constitutivos de tortura, asesinato, desaparición forzada y/o violencia sexual perpetrada por alguna fuerza militar. A estos casos debemos sumarle la recomendación 92/2021 en la que se marca como responsables a elementos de la Guardia Nacional, de haber asesinado a una mujer. Adicionalmente se debe tener en cuenta que las recomendaciones son documentos en los que se analizan y acreditan hechos ocurridos en el pasado (en muchas ocasiones cercano), por lo que no debe sorprender que en próximos años el número de documentos que identifiquen a la GN como perpetradores irá en ascenso, como ha sucedido en 2022 con la emisión de la recomendación 52VG/2022 que, si bien sale del periodo de análisis propuesto para esta investigación, narra hechos ocurridos en septiembre del 2020, perpetrados en Chihuahua.

Para dimensionar en términos reales lo que significan estos números en relación con la amplitud del sistema involucrado, por no decir utilizado, en la perpetración de crímenes internacionales y graves violaciones a derechos humanos, es necesario partir de la estructura militar, de cómo se conforma y cómo, en su mayoría, a lo largo de este periodo de guerra interiorizada, han sido señalados como perpetradores de privaciones graves a la libertad, tortura, asesinato, desaparición forzada y violencia sexual.

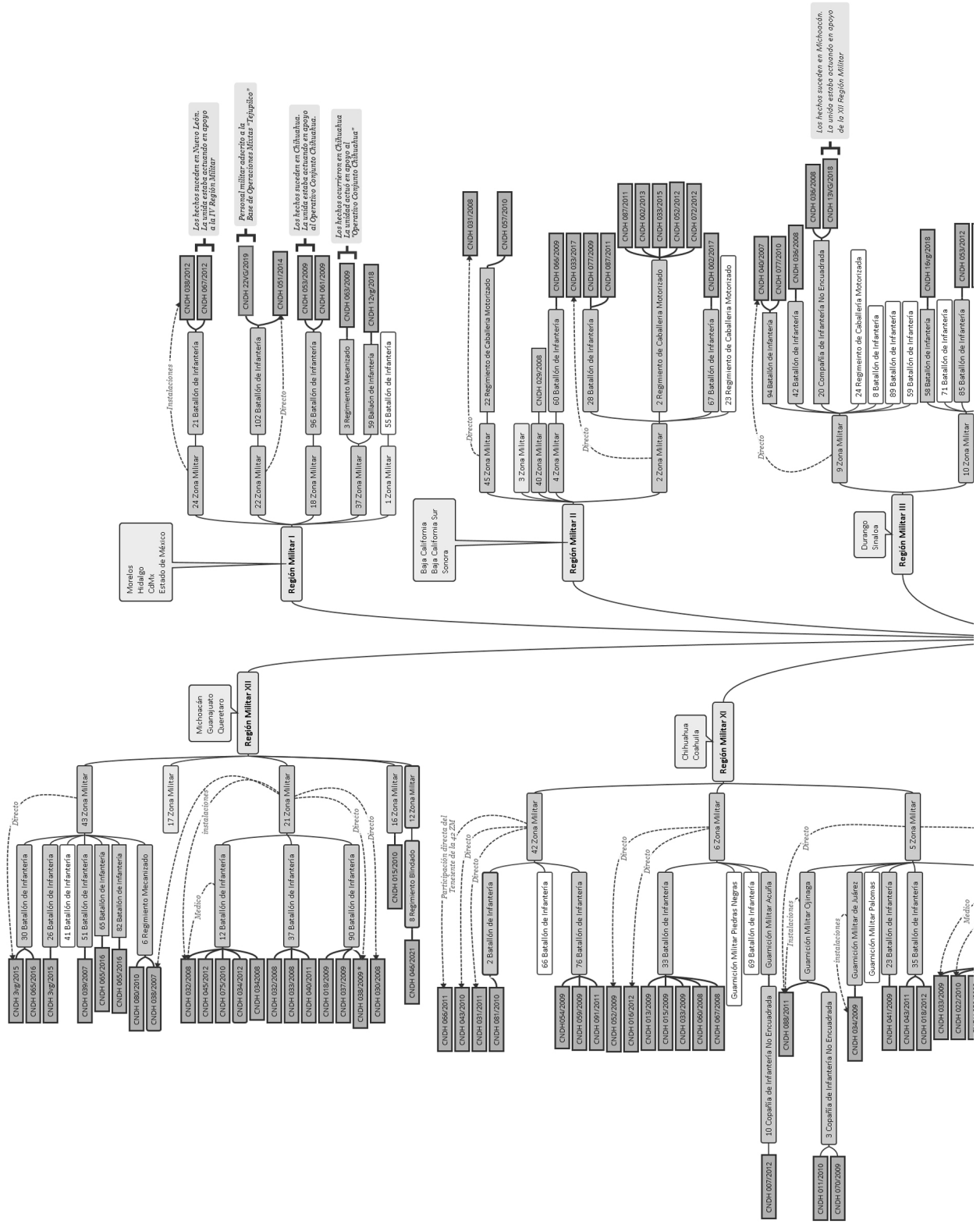
Para muestra de ello centraremos este análisis en la estructura de la SEDENA. El mando supremo del Ejército mexicano es el presidente, quien está al frente de una estructura jerárquica compuesta por el "alto mando" que ejerce el secretario de la Defensa Nacional, los "mandos superiores" a cargo de los comandantes de Región y de Zona Militar⁸⁰, al final se encuentran los mandos de los sectores y subsectores que son unidades estructuradas para cumplir misiones operativas o actividades específicas. Cada uno de estos mandos responde a su superior jerárquico en el escalafón militar.

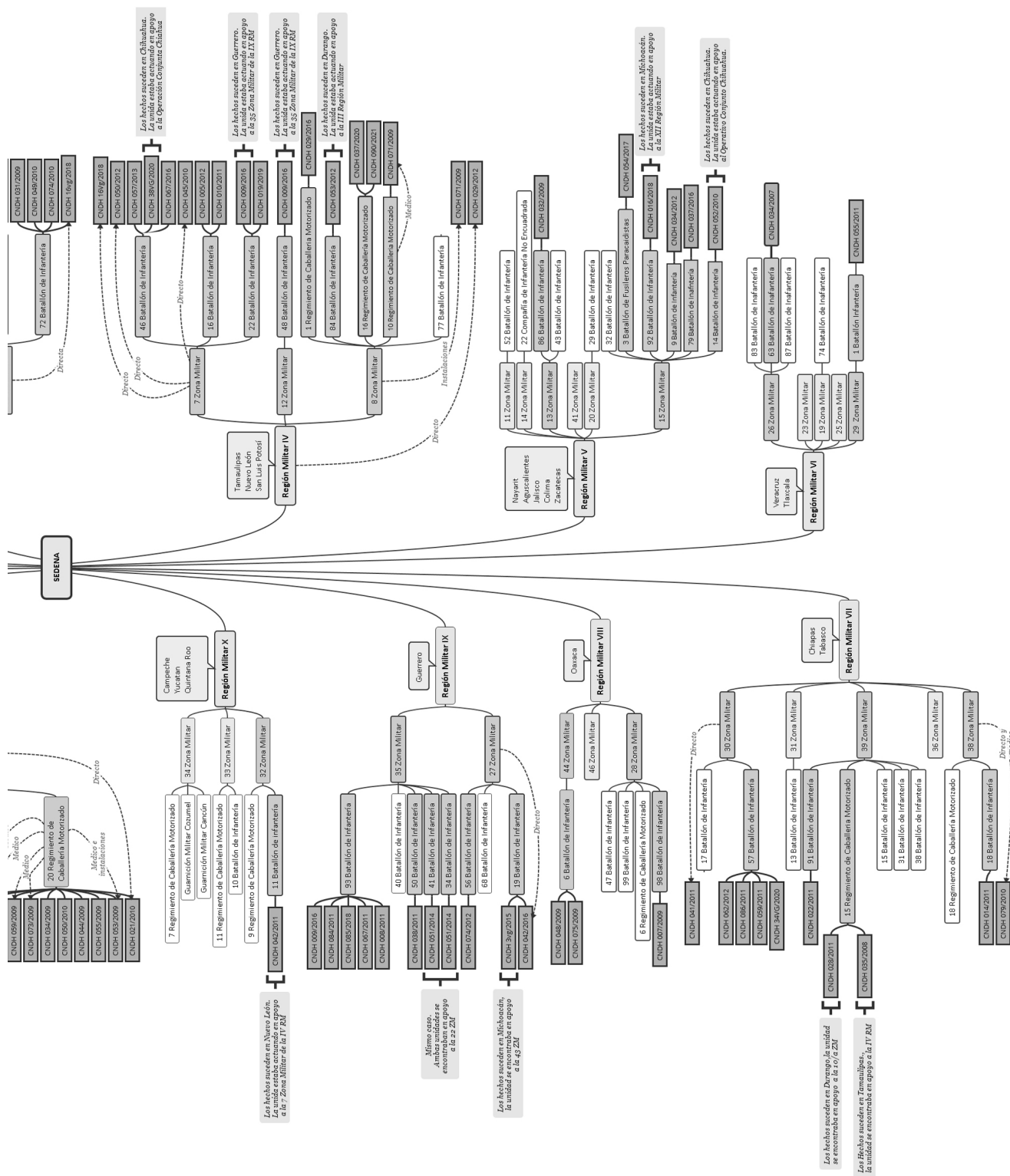
Es decir, nos referimos a una estructura jerárquica compuesta por 12 Regiones Militares, que a su vez están subdivididas en 46 Zonas Militares, conformadas por más de cerca de 200 sectores y subsectores, además de otras unidades especiales y cuerpos de policía militar. Pero hablar de la amplitud de la violencia de sistema, es entender qué tanto de esa estructura ha sido utilizada para perpetrar crímenes atroces.

⁷⁹ Se hace una distinción entre caso y Recomendaciones emitidas por la CNDH, ya que algunos de estos documentos narran varios hechos violatorios perpetrados en distintos tiempo y lugares.

⁸⁰ El Ejército mexicano operó bajo el Reglamento General de Regiones y Zonas Militares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1951 hasta que dicho reglamento fue derogado por el Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza el 22 de abril de 2013.

Estructura Operativa de Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y casos atribuidos a sus unidades (Recomendaciones de CNDH de diciembre 2006 a diciembre 2021)





En este sentido se identificó el involucramiento de las 12 Regiones Militares y de 32 de sus Zonas Militares, es decir del 100% y del 70% respectivamente. A su vez fue posible acreditar la participación en los crímenes de tortura, desaparición forzada, asesinato y/o violencia sexual, del personal de al menos 49 Batallones de Infantería, 7 Regimientos de Caballería Motorizada, 3 Regimientos Mecanizados, 3 Guarniciones Militares, 3 Compañías de Infantería No Encuadrada, 4 batallones de policía militar, 2 batallones de Fuerzas Especiales, 1 Regimiento de Artillería, 1 Regimiento Blindado y 1 Batallón de Fusileros Paracaidistas.

Con esto no queremos decir que son solo estas las unidades perpetradoras, por el contrario, estas son las únicas que nos fue posible identificar a través de documentos públicos, a pesar de la opacidad y la impermeabilidad con la que las instituciones castrenses y del Ejecutivo Federal se manejan al momento de ser cuestionadas sobre los resultados de una fallida estrategia de seguridad.

La amplitud de la estructura involucrada en la perpetración de crímenes internacionales denota una violencia sistémica, que se ve reforzada por la invisibilización de las víctimas. El Estado no ha sido capaz de contar con los indicadores adecuados para entender las dinámicas diferenciadas de las violencias, ha negado impunidad histórica de las FFAA, ha realizado intentos por borrar la memoria y por la interiorización de la idea de la necesidad del conflicto, la guerra y la militarización.

A octubre de 2022, el ejecutivo y al parecer ambas cámaras legislativas (Senadores y Diputados) empujan por perpetuar un modelo militar que ha traído consigo resultados catastróficos, haciendo que la recientemente creada GN, supuestamente civil, ahora dependa administrativa y operativamente de una amplia Estructura Militar (SEDENA) que se ha encargado de perpetrar múltiples violaciones. Aunque se cambie el nombre de las instituciones o se creen nuevas (con los mismos elementos de las viejas), la seguridad civil no se procura por medio de materiales y dinámicas de guerra.

Qué parecidos son los casos y sus justificaciones, tanto los perpetrados en el Marco de la Operación Conjunta Chihuahua⁸¹, o el asesinato de Javier y Jorge (estudiantes del Tec. De Monterrey⁸²), como los asesinatos cometidos por la Guardia Nacional en Delicias-Chihuahua⁸³, en Jalapa-Tabasco⁸⁴, Ángel Yael el estudiante de la Universidad de Guanajuato⁸⁵ o Heidi Mariana de 4 años de edad⁸⁶.

⁸¹ Ver: CMDPDH. Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, México entre 2008 y 2010. Disponible en: <https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-comunicacion-cpi-chihuahua-esp-2018.pdf> (último acceso 11 de octubre de 2022).

⁸² Ver Recomendación CNDH 45/201.

⁸³ Ver Recomendación CNDH 52VG/2022.

⁸⁴ Ver Recomendación CNDH 92/2021.

⁸⁵ Ver: Infobae. Guardia Nacional disparó y asesinó a estudiante de la Universidad de Guanajuato. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/28/guardia-nacional-disparo-y-asesino-a-un-estudiante-de-la-universidad-de-guanajuato/> (último acceso 11 de octubre de 2022).

⁸⁶ Ver: Aristegui Noticias. Acusan a militares de matar a la niña Heidi Mariana, de 4 años, durante persecución. 01/09/2022. Disponible en: <https://aristeginoticias.com/0109/mexico/acusan-a-militares-de-matar-a-la-nina-heidi-mariana-de-4-anos-durante-persecucion/> (último acceso 11 de octubre de 2022).

La narrativa sigue siendo la misma que se ha utilizado durante estos 16 años: un vehículo sospechoso, una persecución, una confrontación, la supuesta posesión de armas o drogas, combinados con la orden de combate frontal al crimen organizado, a través de un modelo históricamente diseñado para abatir y neutralizar enemigos. Los actos criminales se envuelven en la justificación perfecta para inmortalizar la guerra interiorizada, para mantener a los militares en las calles, perpetuando y repitiendo los patrones de conducta al momento de cometer graves violaciones a derechos humanos o crímenes atroces de carácter internacional.

Se trata entonces de hechos ejecutados en el marco de la política de Estado que propicia y alienta la comisión de crímenes y de graves violaciones a derechos humanos. Los miembros de las FFAA, con todo y sus particularidades al interior de cada corporación, han demostrado una clara organización, actuando con una incuestionable voluntad de aparentar que su proceder se da siempre en el marco de la legalidad. Acreditando, además, la existencia de un escenario que propicia y ordena el asesinato de personas, el uso de la tortura como un método de investigación y la desaparición forzada como una herramienta para el ocultamiento de la verdad (Chávez y Amaya, 2020).

Ante esto, resulta sumamente alarmante que el actual gobierno niegue la memoria de miles de víctimas y la impunidad histórica que cobija y blinda a las Fuerzas Armadas, posicionándose como un poder fáctico incuestionable, que ha ganado cada vez más espacios e influencia en la vida pública y civil del país.



3.2. De la seguridad pública a la vida civil

Aunado a la presencia de personal militar en las comunidades y territorios, distribuidos en prácticamente todo el país en tareas de seguridad o de “combate al crimen organizado”, las Fuerzas Armadas también han sido asignadas a tareas, responsabilidades y espacios de corte civil que no se encuentran relacionados con funciones estrictamente militares, en un proceso que profundiza y expande la militarización en México (dimensión cultural de la militarización). Esto a pesar de que no han demostrado efectividad en las actividades que se les han delegado relacionadas con la seguridad como lo mencionamos en apartados anteriores.

La cooptación de los espacios civiles por parte de elementos militares conlleva un debilitamiento de las instituciones y por consiguiente el fortalecimiento económico y político de las FFAA. Con ello, presenciamos la fragilidad de los cimientos democráticos, ya que los valores, principios y formas de organización y actuación de las FFAA no son compatibles con el ejercicio plural, deliberativo y libre de las organizaciones públicas.

Los 16 años de estrategia militarizada de la seguridad ejemplifican de buena manera lo anterior, pues han implicado un severo debilitamiento de las policías locales en términos de presupuesto y capacitación, así como la desaparición del cuerpo policial federal, sustituido por uno militar. De esta forma, se fabrican las condiciones para la continuidad del Ejército y la Armada en esas labores, perpetuando la dependencia de las autoridades civiles a los militares, quienes no solo ejecutan sino que planean y desarrollan las estrategias de esta área. De acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal⁸⁷, en 2022 hay 1,079 personas provenientes de SEDENA y 118 de la Marina en las instituciones de seguridad locales, así como 244 que estuvieron en la Policía Federal o Guardia Nacional, y casi un cuarto de las dependencias de este ramo en el país tiene como titular a un elemento castrense (23.5%).

El Observatorio de la Guardia Nacional (Causa en Común, 2022) señala que hay 163 puestos en diversas instituciones civiles que han sido ocupados por militares (retirados o en activo) en el transcurso de este sexenio (2018 a junio de 2022); 56 de estos puestos corresponden a instituciones de seguridad pública y policiales, 44 a áreas de migración, 18 se encuentran en el ISSSTE, 17 en aduanas y otros 17 en administración portuaria, mientras los demás se encuentran en cuestiones de aviación y en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

⁸⁷ INEGI (2022), Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022. Presentación de resultados generales, disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/cnspe/2022/> (último acceso 11 de octubre de 2022).

Una de las cuestiones más preocupantes de este proceso de militarización de los espacios y labores civiles reside en su ilegalidad. A pesar de lo establecido en el artículo 129 constitucional referente a las funciones de las autoridades militares en tiempos de paz (y es preciso aquí enfatizar que no ha existido ninguna declaratoria oficial de emergencia que establezca que no estamos en tiempos de paz), las autoridades civiles han hecho caso omiso de estas restricciones y en cambio se apoyan en “una interpretación amplia” de “artículos muy genéricos” (Velázquez et al., 2021, p. 22) para celebrar convenios que otorgan recursos y labores civiles a las instituciones castrenses; todo lo anterior avalado por los poderes legislativo y judicial que han decidido callar ante esos procesos arbitrarios, haciendo uso de interpretaciones no acordes al espíritu constitucional.

En este sentido, en el Congreso se han presentado diversas iniciativas que en su mayoría pretenden dotar de legalidad a los procesos de militarización que ya se llevan a cabo en la práctica. De acuerdo con el informe del Inventario Nacional de lo Militarizado (Velázquez et al., 2021), “las FAM [Fuerzas Armadas Mexicanas] son un tema cada vez más recurrente en la discusión legislativa a nivel federal (...) desde 2006 cada legislatura ha ido superando a la anterior en propuestas legislativas relacionadas con las FAM” (p. 23), duplicando en la LXIV legislatura (2018-2021) la cantidad de iniciativas presentadas en la LX (2006-2009), pasando de menos de 400 a más de 800 en ese periodo.

No debe pasarse por alto que, al mismo tiempo que se militarizan las labores de seguridad pública, la permanencia de las FFAA en estas tareas tiene un impacto en las instituciones castrenses, forzándolas a pensar y actuar en términos distintos a los de su esencia militar de defensa nacional, desnaturalizándolas en un proceso de “policialización” que impacta en sus estructuras y actividades. Así, no se cuenta con policías capaces para las tareas de seguridad pública, ni con militares aptos para estas ni para las tareas de disciplina castrense que les corresponde en tiempos de paz.

Además, el énfasis en la labor de las FFAA para brindar seguridad no tiene impacto en las estructuras y principales problemas del sistema de justicia mexicano, que están concentrados en las fiscalías, lo que ha implicado preservar un modelo que genera saturación, rezago y niveles de impunidad de alrededor del 90% de los delitos que se cometen en el país. Mientras la atención y prioridad siga en las instituciones de seguridad en las calles sin transformar las labores de investigación y procuración de justicia, no podrá transformarse el contexto de impunidad y de inercia de las violencias.

La migración en México ha sido un fenómeno que, en lugar de garantizarse como un derecho, se decidió tratar como un problema de seguridad pública. Las FFAA son protagonistas en labores para impedir el ingreso de personas migrantes al país y la detención migratoria -que, vale la pena decir es violatoria de derechos humanos-, con lo cual ha aumentado de manera importante la vulnerabilidad de las personas que transitan por el territorio nacional. Las personas migrantes durante su tránsito por país suelen ser víctimas de extorsión, secuestros, trata y explotación de personas, violencia sexual, maltrato físico y diversas violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de grupos criminales como directamente perpetrados por autoridades, algunas veces actuando en colusión. Para 2022 casi 30 mil soldados se encuentran desplegados para la atención de cuestiones migratorias (Arista, 2022).

Fuera del ámbito de la seguridad, los militares han incursionado en otras áreas de la administración pública, especialmente a nivel federal. El Inventario Nacional de lo Militarizado incluye menciones a: “la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología” (p. 5-6); “la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19, al quedar a cargo de la distribución y resguardo de las vacunas” (p. 6); “han reconstruido hospitales, proporcionado seguridad a centros de salud, trasladado equipos e insumos médicos, confeccionado uniformes quirúrgicos e, incluso, repatriado mexicanos en el extranjero” (p. 6-7); y “la construcción de obras públicas y como contratistas; cuidando viveros y produciendo plantas; participando como actores primarios en políticas de salud y bienestar social; custodiando obras e instituciones públicas; erradicando cultivos ilícitos e, incluso, resguardando televisiones” (p. 20), entre otras actividades.

Lo constante es que la expansión de la presencia militar en los diversos ámbitos públicos y civiles se traduzca en mayor cantidad de recursos, principalmente monetarios, en manos de estas instituciones. Así, el poder y el dinero van de la mano en el proceso de militarización que atraviesa el país en los últimos 15 años.

Datos del Banco Mundial⁸⁸ apuntan que en 2006 México destinó aproximadamente 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en gasto militar, mientras que para 2020 el porcentaje aumentó al doble (0.6%); en términos reales y siguiendo la misma fuente, el gasto militar habría pasado de 33 mil millones a 125 mil millones de pesos (constantes) entre 2006 y 2019 (dato más reciente en esa fuente). Además, el personal de las Fuerzas Armadas habría pasado de 204 mil elementos a 328 mil.

⁸⁸ Banco Mundial. Gasto Militar (%del PIB) – México. Disponible en <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=MX>, (último acceso 11 de octubre de 2022).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos de SEDENA han aumentado de manera constante de 2012 a 2021, pasando de 55,610 millones a 112,557 millones de pesos en ese periodo (un aumento de poco más del 200%), mientras que el presupuesto de la Marina atravesó un aumento similar y proporcional, pasando de 19,679 millones a 37,750 millones de pesos (lo que representa un aumento de poco más del 190%).

México Evalúa⁸⁹ documentó que en 2014 las instancias civiles de seguridad (FGR, SSP, Gobernación) recibieron un presupuesto similar a las instituciones militares (SEDENA, SEMAR) de alrededor de 122 mil millones de pesos, pero a partir de entonces los recursos a las instancias civiles disminuyeron de manera constante llegando en 2021 a 52 mil millones, mientras los recursos a FFAA aumentaron hasta los 190 mil millones de pesos en ese año.

Las cifras de los párrafos anteriores consideran el dinero erogado directamente a las Fuerzas Armadas por parte de la Federación, pero todavía quedaría pendiente agregar los recursos monetarios que otras instituciones le transfieren para el desarrollo de actividades específicas fuera del ámbito militar. De acuerdo con el informe del Inventario Nacional de lo Militarizado, las Fuerzas Armadas han recibido recursos por al menos 4,495,254.60 pesos provenientes de las entidades federativas y 4,530,756,665.60 pesos provenientes de las instituciones civiles.

La transferencia de funciones y recursos a las instituciones castrenses se pretende justificar discursivamente en una idea de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas y las personas que las integran: se les presenta no solo como “no corruptas” sino como incorruptibles, además de disciplinadas -y por tanto efectivas en cualquier tarea que se les encomiende-, y como apolíticas, cuyo objetivo es siempre el servicio a la patria y no los intereses partidistas o particulares. Sin embargo, en la práctica las instituciones castrenses han demostrado ser autoritarias, opacas y centralizadas.

Lo cierto es que no podemos saber qué tan corruptas son porque están cerradas al escrutinio de sus recursos; como ejemplo podemos citar los proyectos estratégicos de la actual administración federal: el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, 2022), a pesar de que la Secretaría de Hacienda había calculado el costo de construcción del AIFA en casi 85 mil millones de pesos, la SEDENA solo transparentó contratos que ascienden a 17 mil 385 millones de pesos, es decir, alrededor de una cuarta parte. De estos contratos, más del 77% se asignaron por invitación restringida a proveedores y casi 23% por asignación directa; estas figuras permiten alta discrecionalidad y las posibilidades de corrupción. Por ejemplo, MCCI identificó contratos a empresas recién creadas y

⁸⁹ Citados en: Lidia Arista (18 de julio de 2022), “Más poder y más dinero: Fuerzas Armadas con el segundo presupuesto más alto” en *Expansión*, disponible en <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/18/mas-poder-y-mas-dinero-fuerzas-armadas-el-segundo-presupuesto-mas-alto>, (último acceso 11 de octubre de 2022).

y contratistas con problemas previos de corrupción. Aunque el AIFA comenzó a operar en marzo del 2022, en agosto operaba solo 12 vuelos diarios (Olivares y Urrutia, 2022) y para el último trimestre del año se calcula que operará alrededor de 30 (Tolentino, 2022) (para comparar, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez opera alrededor de 900 vuelos diariamente [Munguía, 2022]). Por su parte, el Tren Maya está planeado para comenzar a operar en 2024; en 2019 se planteó que costaría 140 mil millones de pesos, pero para septiembre de 2022 la cifra ya había aumentado a 230 mil millones de pesos con aproximadamente 44% de avance físico de la obra (De la Rosa, 2022).

Aunado a la falta de transparencia propia de las instituciones castrenses, es revelador que otras instituciones son también opacas respecto a los convenios, recursos y tareas que delegan o comparten con las Fuerzas Armadas, pues, como se menciona en el informe del Inventario Nacional de lo Militarizado, al realizar solicitudes de información “fue, por mucho, más una excepción que una regla recibir respuestas completas y suficientes sin tener que recurrir a los mecanismos de queja que tiene el [INAI]” (p. 21). De 42 solicitudes, se señala que solo en una ocasión recibieron una respuesta completa, mientras que en 16 veces respondieron solo parcialmente y en 12 respuestas se les solicitó un pago para brindar la información.

Además de la falta de transparencia, es importante señalar que el Ejército y la Armada enfrentan una curva de aprendizaje ante las nuevas tareas que se les encomiendan, pues sustituyen a autoridades civiles especializadas y no existe constancia de que los elementos castrenses que cubren estas actividades tengan conocimientos previos o hayan sido preparados en los temas de los que toman control y responsabilidad.

Finalmente, la incursión de las Fuerzas Armadas en diversos ámbitos civiles implica una centralización de las decisiones y estrategias en un núcleo muy reducido de personas, ya que estas instituciones son altamente jerárquicas y concentran casi todo el poder de decisión en los altos mandos, por lo que, al expandir su presencia en espacios civiles no solo se delega en estas dos instituciones un poder grande, sino que directamente se le permite a unas pocas personas decidir y ejecutar acciones en una variedad de ámbitos en los que no son expertas.

Consideraciones finales

Este informe pone de manifiesto la manera en que el proceso de militarización que comenzó en 2006 se ha profundizado, no sólo al abarcar cada vez más territorios, actividades y áreas de la vida pública que deberían ser civiles, sino a través de una interiorización por medio de la imposición de la presencia militar y las narrativas que desde el poder político se han difundido para justificarla.

El saldo es claro: en estos más de quince años de guerra se acumularon y se siguen acumulando miles de víctimas de la violencia y de violaciones graves a derechos humanos, porque una estrategia castrense no da como resultado seguridad, sino que se traduce, como lo muestra la evidencia, en ataques sistemáticos a las poblaciones, especialmente contra las personas más vulnerables, estigmatizándolas y culpándolas de su suerte, “en algo se habrán metido”.

Los datos muestran que los patrones de conducta que derivan en crímenes internacionales permanecen a lo largo del tiempo y a través de las tres administraciones federales que han perpetuado esta estrategia fallida: FCH, EPN y AMLO. La tortura es sistemática, las desapariciones constituyen una crisis estructural y los asesinatos continúan en ascenso. A los integrantes de las instituciones de seguridad, especialmente de las FFAA, no parece importarles quién está al mando del Ejecutivo federal, porque tienen asegurada la impunidad. Las investigaciones son deficientes, lentas y a veces hasta obstructoras de la justicia.

Una de las consecuencias más graves y dolorosas de la fallida estrategia de seguridad es la invisibilización de las cientos de miles de víctimas directas e indirectas de la violencia, así como la indolencia ante las secuelas sociales que dejan en las comunidades y en la sociedad mexicana como un todo, al someterla de manera permanente a los altos niveles de violencia e impunidad que marcan la vida y trayectoria de las personas de diversas maneras. Las instituciones no se interesan en recabar los datos mínimos necesarios para llevar a cabo un diagnóstico certero que permita revertir las actuales condiciones de inseguridad y de violaciones a derechos humanos.

Ante el fracaso en los resultados, las autoridades solo ofrecen retórica y narrativas falaces en que se intenta convencer que las fuerzas armadas son no solo la mejor opción para frenar la violencia sino que son la única opción, porque en los hechos se han encargado de dismantelar, debilitar y desprestigiar a las instituciones civiles. La receta desde hace varias décadas se repite sin cesar: dejar sin recursos materiales y humanos a las instituciones para que su mal desempeño sea la excusa de su eliminación o bien de su claudicación para que caiga en manos castrenses.

Los casos de crímenes internacionales cometidos por elementos militares en los últimos 15 años pueden encontrarse en prácticamente todo el territorio nacional, desvelando un problema sistémico en el que se ven involucrados los altos mandos, y la responsabilidad escala hasta lo más alto de la cadena militar. Dadas las evidencias, no es posible sostener que los hechos sean producto de “malos elementos en una buena institución”, porque a lo largo del tiempo no han hecho más que premiar, ocultar, tolerar, encubrir y promover los crímenes, que son parte misma de una estrategia fallida para pretender dar resultados que en la realidad son falsos.

Es preciso reiterar que la seguridad civil y la paz tan largamente buscada no va a conseguirse a través de las estrategias y los materiales de guerra. Requerimos dismantelar este sistema y construir alternativas a partir de evidencia y a través de canales y prácticas democráticas, incluyentes y diferenciadas para responder a los contextos y necesidades de las comunidades que han sido afectadas y vulneradas en estos largos años de oprobio y violencia.

Referencias

Arista, Lidia (18 de julio de 2022), Más poder y más dinero: Fuerzas Armadas con el segundo presupuesto más alto. Expansión, disponible en <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/18/mas-poder-y-mas-dinero-fuerzas-armadas-el-segundo-presupuesto-mas-alto>

Carrasco Araizaga, Jorge (30 de septiembre de 2011), Militares en el papel de policías: diez años de fracasos. Proceso. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20210930143411/https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/4/15/militares-en-el-papel-de-policias-diez-anos-de-fracasos-182458.html>

Causa en Común (2022), Guardia Nacional, 3 años de definición militarista. Causa en común. Disponible en: http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiay-fuerzasarmadas/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf

Chávez V. Lucia y Amaya L. Jorge (Octubre de 2020), Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Disponible en: <https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-entre-la-brutalidad-y-la-impunidad.pdf>

Clausewitz, Karl Von (1832) De la Guerra. Libro DOT, edición 2002. Disponible en: <http://politicayplanificacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/190/2012/04/Von-Clausewitz-K.-2005-Ramas-del-arte-de-la-guerra-Captulo-I-del-Libro-II-y-Estrategia-Captulo-I-del-Libro-III-en-De-la-Guerra.-Buenos-Aires-AGEB-Aterramar.pdf>

Coca, Itzel (18 de julio de 2022). Las cifras oficiales por desaparición en México: denuncias en fiscalías y registros en RNPdNO. Animal Político. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cifras-oficiales-por-desaparicion-denuncias-y-registros-rnpdno/>

De la Rosa, Alejandro (08 de septiembre de 2022), En presupuesto, el Tren Maya requeriría en el 2023 el doble del costo del AIFA. El Economista. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Sectur-solicito-un-presupuesto-de-143073-millones-de-pesos-para-terminar-el-Tren-Maya-en-2023-20220908-0102.html>

Kraska, Peter B. (2001) Jugando a la guerra. Masculinidad, militarismo y sus consecuencias en el mundo real. En Sirimarco, Mariana (Comp.) Estudiar a la Policía. La mirada desde las ciencias sociales. Teseo. Disponible en: https://books.google.com.mx/books?id=p00U6IPQoXAC&pg=PA273&lpg=PA273&dq=peter+b+kraska+militarismo&source=bl&ots=-dB128yq4K&sig=ACfU3U0ajmBZvGjdXqusnhn4wvYqkEgVs-g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiKjI2t_6v5AhWeKkQIHWVYDgoQ6AF6BAGE-AM#v=onepage&q=peter%20b%20kraska%20militarismo&f=false

Kraska, Peter B. (13 de diciembre de 2007), Militarización y vigilancia: su relevancia en la policía del siglo XXI. Policing Advance Access. Disponible en: <https://cjmasters.eku.edu/sites/cjmasters.eku.edu/files/21stmilitarization.pdf>

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (21 de marzo de 2022), "El aeropuerto del dedazo militar" disponible en: <https://contralacorrupcion.mx/aeropuerto-santa-lucia-dedazo-militar/>

Munguía, Aldo (01 de septiembre de 2022), "Aerolíneas 'despegarán' de otros aeropuertos tras reducción de vuelos en AICM", en El Financiero; disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/09/01/revisaran-todos-los-casos-de-la-migracion-de-vuelos-del-aicm/>

Olivares, Emir y Alonso Urrutia (08 de agosto de 2022), "Operaciones en AIFA aumentarán de 12 a 46 vuelos diarios" en La Jornada; disponible en: <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/08/politica/a-partir-del-15-de-agosto-operaciones-en-aifa-aumentaran-a-46-vuelos-diarios/>

Secretaría de Gobernación (2021), Informe para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, disponible en: <https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/CNB-Informe-CED-Espanol.pdf>

Tolentino, Juan (20 de septiembre de 2022), "El AIFA operará 30 vuelos diarios para la temporada de invierno" en Expansión; disponible en: <https://expansion.mx/empresas/2022/09/20/aifa-tendra-30-vuelos-diarios-temporada-de-invierno>

Velázquez, Sara; Estefanía Álvarez, Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo (2021). Inventario Nacional de lo Militarizado, Centro de Investigación y Docencia Económicas: Ciudad de México. Disponible en: <https://ppdata.politicadedrogas.org/PPD/INM/files/INM-Report.pdf>

